

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

Fondatore

LELIO BASSO (ITALIA)

Presidente

*SALVATORE SENESE
(ITALIA)*

***IMPRESE TRANSAZIONALI E DIRITTI DEI POPOLI
IN COLOMBIA, 2006 – 2008***

SESSIONE FINALE

**Bogotá, Auditorio Leon de Greiff, Università Nazionale della Colombia
21 – 23 luglio 2008**

SENTENZA

*SEGRETERIA GENERALE: FONDAZIONE BASSO
VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 - 00186 ROMA, ITALIA
TEL: 0668801468 - FAX: 066877774
E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.it – filb@iol.it
Web: <http://www.internazionaleleliobasso.it>*

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI E PARTECIPANTI

Il lungo processo di indagine, raccolta di testimonianze e di stesura di rapporti sviluppato nel corso delle sei udienze preliminari (2006-2008) ha visto la partecipazione attiva di una rete molto ampia e rappresentativa di organizzazioni promotrici colombane e internazionali, che comprende, tra le altre, quelle elencate di seguito in ordine alfabetico. È doveroso ricordare che hanno assistito all'udienza finale di Bogotá 3250 persone.

Acción Ecológica; Acción Permanente Por La Paz; Acikek; Acadehum; Adida, Antioquia; Afavit; Amnistía Internacional; Alebrije; App, Panamá; Asamblea Permanente De La Sociedad Civil Por La Paz; Asem, Barrancabermeja; Asipab; Asmulider, Bogotá; Asocandespo; Asociación Campesina De Antioquia; Asociación Colombiana De Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza"; Asociación Colombiana De Estudiantes Universitarios, Aceu; Asociación De Abogados Defensores De Derechos Humanos; Asociación De Mujeres, Palmira; Asociación Internacional De Jusirtas Demócratas; Asociación Nacional De Usuarios Campesinos Unidad Y Reconstrucción, Anuc Ur; Asociación Para La Investigación Y Acción Social "Nomadesc"; Asoinca, Popayán; Asoproa, Oriente Antioqueño; Asou'wa; Banco de datos, Armenia; Banderbilt University, Estados Unidos; Baso; Brigadas Internacionales De Paz; Cabildo Guambía; Cabildo Indígena Honduras, Cauca; Cahucopana; Campaña Prohibido Olvidar; Cedsala España; Central Unitaria De Trabajadores, Cut; Centro Cultural Caleidoscopio; Centro De Desarrollo Panafricano De Miami (Usa); Censat Agua Viva; Cepalc; Cgt, España; Christian Aid; Cima; Cinelibertad; Codhes; Codehsel; Colectivo Antígona, Univesridad Nacional; Colectivo Bachué; Colectivo Brecha; Colectivo Cable A Tierra; Colectivo Coliche, España; Colectivo De Abogados "José Alvear Restrepo"; Colectivo De Derechos Humanos "Semillas De Libertad", Codhesel; Colectivo Identidad; Colectivo La Colmena; Colectivo Maíz Rebelde, Bogotá; Colectivo Pensamiento Crítico; Colectivo Somos Sudacas; Colectivo Vivo Arte; Colegiatura De Abogados, Cali; Colegio Liceo Ecológico Del Norte; Colegio Manuela Beltrán, Valledupar; Colegio Saludcoop Sur; Colombia Solidarity Campaign, Reino Unido; Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz; Comité De Integración Social Del Catatumbo, Cisca; Comité De Solidaridad Con América Latina, Asturias; Comité Internacionalista, País Vasco; Comité Nuruego De Solidaridad Con América Latina; Comité Permanente Por La Defensa De Los Derechos Humanos, Cpdh; Comité Pro Defensa De Taganga (Cooperativa De Pescadores, Corporación De Chinchoreros, Asociación De Profesionales, Expendedoras De Alimentos, Transportadores De Turistas, Grupo De Teatro, Junta Administradora Local, Asociación De Kioscos); Comité Sindical De Solidaridad Con Colombia, Nueva York; Comité De Solidaridad Con Los Presos Politicos; Comunidad De Paz De San José De Apartadó; Comunidad Hijas De San José; Comunidad Muisca; Comunidad De Autodeterminacion Vida Y Dignidad De Cacarica; Concejo Juventudes; Confederación Nindígena Tayrona; Consejo Regional Indígena De Caldas; Consejo Regional Indígena De Risaralda; Cooperación; Coordinación De Jóvenes Del Cauca; Coordinador Nacional Agrario, Cna; Coordinadora Nacional De Desplazados, Cnd; Copdiconc; Corporación Alotropia; Corporación

Ambientalista Bosque Montano; Corporación Aury Sara Marrugo; Corporación Avocar; Corporación Avre; Corporación Cactus; Corporación Claretiana; Corporación De Servicio A Proyectos De Desarrollo, Podion; Corporación Jurídica Libertad; Corporación Niños Y Niñas Por La Paz; Corporación Nuevo Día; Corporación Pescar; Corporación Sembrar; Corporación Social Para La Asesoría Y Capacitación Comunitaria - Cospacc; Credhos; Cuba Labor Exchange; Defensoría Juvenil; Desde Abajo; Diócesis De Quibdó; Entrepueblos; Equipo De Educación Popular "Pañuelos En Rebeldía", Argentina; Escuela De Liderazgo Ambiental; Escuela Nacional Sindical; Escuela Popular De Jóvenes; Esg, Colonia; Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, Fedeagromisbol; Federación Colombiana De Educadores, Fecode; Federación De Estudiantes De Agronomía; Federación De Estudiantes Universitarios, Feu; Federación Mixta De Pensionados De Antioquia Fempa; Federación Nacional De Trabajadores Al Servicio Del Estado - Fenaltrase; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - Fensuagro; Federación Universitaria Nacional Comisiones; Foro Energético Latinoamericano Y Caribeño, Rep. Bolivariana De Venezuela; Frente Popular "Darío Santillán" Argentina; Forcoffes; Fumpaz; Fundación Bio Andina; Fundación Cese Al Fuego; Fundación Comité De Derechos Humanos "Joel Sierra" - Arauca; Fundación Comité De Solidaridad Con Los Presos Políticos; Fundación Fica; Fundación Franciscana Santo Tomás Moro; Fundación Jaide; Fundación San Isidro; Galería De La Memoria; Grupos Ecológicos De Risaralda; Grupos Estudiantiles Confederados, Bogotá; Hijos E Hijas; Human Rights Everywhere; Identidad Lafkenche, Chile; Iepri; Instituto Latinoamericano De Servicios Legales Alternativos, Ilsa; Instituto Nacional Sindical; Internacional De Servicios Públicos, Isp - Subregión Andina; Interpares, Canadá; Kairos; La Bruja Films; Mencoldes; Mesa Distrital De Servicios Públicos, Bogotá; Mesa Permanente Kofán; Movimiento De Víctimas De Crímenes De Estado; Movimiento Popular Regional; Movimiento Por La Defensa De Los Derechos Del Pueblo Modep; Mujeres Por La Resistencia; Novib; Objetores De Onciencia; Observatorio De Derechos Indígenas; Observatorio De Megaproyectos De Pereira; Observatorio Internacional De Paz; Observatorio Social De Empresas Transnacionales, Megaproyectos Y Derechos Humanos En Colombia Oset; Observatorio Socioambiental, Pereira; Oficina De Derechos Sociales Seco, España; Opción Legal; Organización De Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Colombiana Opiac; Organización De Solidaridad Con Los Pueblos De Asia, África Y América Latina, Ospaaal; Organización De Vecinos De Onleyville; Organización Femenina Popular; Organización Indígena Kankuama Oik-; Organización Nacional Indígena De Colombia Onic; Organizaciones Sociales De Arauca (Asociación Departamental De Usuarios Campesinos Aduc-, Asociación Juvenil Y Estudiantil Regional Asojer, Cooperativa Agropecuaria Del Sarare -Cooagrosarare, Asociación De Juntas De Acción Comunal Asojuntas, Central Unitaria De Los Trabajadores De Colombia Cut, Seccional Arauca, Asociación Amanecer De Mujeres Por Arauca Amar); Oxfam; Pan Para El Mundo; Partido Comunista Colombiano; Pasc, Canadá; Pastoral De Trabajadores De Barrababermeja; Pastoral Social De La Diócesis De Quibdo; Pax Christi, Alemania; Paz Con Dignidad; Periódico Desafío; Periódico El Nuevo Oriente; Periódico El Turbión; Periódico Polo; Pescar; Planeta Paz; Plataforma Colombiana De Derechos Humanos, Democracia Y Desarrollo; Plataforma Rural; Polo Democrático Alternativo; Prensa Latina, Argentina; Prensa Rural; Proceso De Comunidades Negras De

Colombia, Pcn; Productora Todos Los Pueblos; Project Councelling Service (Consejería En Proyectos) Pcs; Proyecto Nunca Más; Proyecto Aurora; Pueblo Nasa; Pueblo Wayuu; Pueblo Bari; Pueblo Embera; Pueblos UZWa; Pueblo Sikvani; Pueblo Kogi; Pueblo Wiwa; Rapalmira; Recalca; Red Colombiana De Acción Contra El Libre Comercio Y El Alca, Recalca; Red De Bibliotecas Comunitarias; Red De Organizaciones Comunitarias De Medellín; Red De Organizaciones Sociales De Bogotá; Red De Usuarios De Servicios Públicos De La Costa Caribe; Red Estudiantil Antorcha; Red Europea De Hermandad Y Solidaridad Con Colombia, Redher; Red Juvenil, Medellín; Red Revuelta; Reditoco; Semilleros De Investigación De Las Universidades Monserrate Y Distrital; Serpaj Colombia; Sindicato De Trabajadores Agrarios De Sumapaz, Sintrapaz; Sindicato De Trabajadores De Empresas De Servicios Públicos Sintraemsdes-; Sindicato De Trabajadores De La Empresa Minera De Colombia, Sintraminercol; Sindicato De Trabajadores De La Industria Del Tabaco Sintraintabaco; Sindicato De Trabajadores De La Industria Metalúrgica Sintrametal; Sindicato De Trabajadores De Las Electrificadoras De Colombia Sintraelecol; Sindicato De Trabajadores De Las Empresas Municipales De Cali Sintraemcali; Sindicato De Trabajadores Y Empleados Universitarios De Colombia Sintraunicol; Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De Alimentos, Sinaltrainal; Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria Del Carbón Sintracarbón; Sindicato Nacional De Trabajadores Del Instituto De Seguros Sociales Sintraiss; Sintraclínica, Medellín; Sintradistritales; Sintraemsirva; Sintraicollantas, Cali; Sintrainquigas; Sintralimenticia; Sintramarítimo, Buenaventura; Sintrapresan; Siudat; Sociólogos Sin Fronteras; Solifonds/Unia; Somos Río; South Face News; Sutima, Medellín; Take Back The Land, Estados Unidos; Tejdhes; Tejido Comunicación; Telesur; Terra Nova; Territoriosur;Unidad De Amigos De Mosquera; Unimotor, Bucaramanga; Unión Sindical Obrera, Uso; Universidad En Realidad; Uoafroc;Veeduría "Ojo Al Parque"; Veedurías Ciudadanas.

1. INTRODUZIONE

1.1 Storia e legittimità del Tribunale Permanente dei Popoli

Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) è un organismo internazionale fondato nel 1979 con il proposito di rendere permanente la funzione che era stata propria dei Tribunali Russell sul Vietnam (1966-67) e sulle dittature latinoamericane (1974-76): garantire uno spazio di visibilità, di presa di parola, di giudizio delle violazioni sistematiche dei diritti umani, individuali e collettivi, e dei diritti dei popoli, che non trovano risposte istituzionali dei singoli Paesi né nella comunità degli Stati. Il diritto internazionale è di fatto un ordinamento imperfetto, in evoluzione. Anche con l'istituzione della Corte Penale Internazionale, che ha escluso i crimini economici dalla sua competenza, per molte e forse per la maggior parte delle azioni che si producono o coincidono con la violazione del diritto alla vita dei popoli non esiste la possibilità di formulare giudizi che abbiano valore vincolante. È questo il caso specifico di tutto l'ambito inerente ai crimini che hanno radici e meccanismi economici, che nel corso degli ultimi venti anni si sono trasformati chiaramente in una delle cause principali e più drammatiche delle violazioni dei diritti umani.

La necessità e l'urgenza di una funzione promotrice in questo campo (che è centrale per un giudizio sul ruolo delle imprese transnazionali, in rapporto con i diritti dei popoli in Colombia) sono state subito avvertite dal TPP, che ha promosso una serie di sessioni che hanno analizzato sia gli aspetti più generali e dottrinali della relazione tra la pretesa di autonomia dell'economia e l'obbligatorietà dei diritti fondamentali, sia la valutazione del loro impatto sulla vita delle persone e dei popoli reali.

È opportuno menzionare dettagliatamente le due sessioni dedicate alle politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (Berlino, 1988; Madrid, 1994); la sessione sulla conquista dell'America Latina e le origini del diritto internazionale (Venezia, 1992); il disastro di Bhopal e la sostanziale impunità dell'impresa responsabile (Bhopal, 1991; Londra 1994); le imprese transnazionali dell'industria tessile, dell'abbigliamento e degli indumenti sportivi e il loro impatto sui diritti del lavoro e l'ambiente (Bruxelles, 1998); la sistematicità delle pratiche perverse delle compagnie transnazionali (Warwick, 2001); infine, la sessione sulle politiche neoliberali e transnazionali europee in America Latina (Vienna, 2006; Lima, 2008), le cui analisi e conclusioni costituiscono il quadro di riferimento dottrinale e il contesto interpretativo ed applicativo più generale anche della sentenza sulla Colombia (per le sentenze, si rimanda alla pagina web: www.internazionaleleliobasso.it).

Il carattere di "opinione" del TPP spiega chiaramente sia il significato sia i limiti della sua attività: non può, infatti, esercitare nessuna influenza che non sia quella che l'opinione pubblica (vale a dire il senso e l'appoggio operativo dei popoli) gli può garantire; ma è la sua stessa esistenza, che ne sottolinea la legittimità, analizzando criticamente e ponendo in evidenza le lacune delle pratiche del diritto a livello nazionale e internazionale, e sottolineando in tal modo la priorità gerarchica della sovranità dei popoli del mondo e degli organismi della società civile, che è l'unica fonte dell'autorità degli Stati stessi.

1.2 La sessione sulle imprese transnazionali in Colombia

Per la seconda volta la Colombia è oggetto di esame e di giudizio del TPP. Tra il 1989 e il 1991, il Tribunale ha realizzato una sessione per giudicare l'impunità dei crimini di lesa umanità, articolata in un ciclo di udienze che ha coinvolto dodici Paesi dell'America Latina, primo fra tutto la Colombia, che è stata anche sede della sessione finale deliberante (Bogotà, 22-25 aprile 1991). Quindici anni più tardi il Tribunale ha accettato di sottoporre nuovamente a giudizio situazioni gravi che interessano la vita e i diritti fondamentali di gran parte della popolazione colombiana, questa volta concentrandosi specificamente sulle imprese transnazionali che operano in Colombia con pratiche che appaiono in aperta violazione dei diritti umani più elementari, attraverso reti di violenza che affondano le proprie radici in strategie dello Stato, come politiche imposte, a livello di tutto il subcontinente latino-americano, da ragioni di sicurezza per i grandi investitori e impresari.

La complessità strutturale e la gravità delle accuse del caso Colombia hanno indirizzato i lavori del TPP su un percorso in grado di garantire, da un lato, un approfondimento adeguato dei problemi e, dall'altro, un'ampia partecipazione al processo di raccolta delle prove e delle testimonianze (coinvolgendo, non solo esperti, ma anche gruppi molto numerosi di cittadini di ogni regione) per delineare un quadro particolarmente complesso e coerente dei fatti e degli attori coinvolti.

A seguito dell'accettazione da parte del TPP dell'accusa generale formulata nel 2005 da una rete molto rappresentativa di associazioni e gruppi, in più di due anni, dopo l'udienza preliminare sull'impresa transnazionale svizzera Nestlé, realizzata nella città di Berna nel mese di ottobre 2005, si sono svolte sei udienze tematiche: imprese transnazionali agroalimentari (Bogotà 1 e 2 aprile 2006), imprese minerarie (Medellín 10 e 11 novembre 2006), imprese transnazionali che minacciano la biodiversità (Zona Umanitaria Nueva Esperanza en Dios, bacino del Rio Cacarica, Chocò, 25 e 26 febbraio 2007), imprese transnazionali petrolifere (Bogotà, 3, 4 e 5 agosto 2007); servizi pubblici (Bogotà, 7 e 8 aprile 2008); popoli indigeni (Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta, 18 e 19 luglio 2008).

I procedimenti e la documentazione relativi alle testimonianze e ai rapporti tecnici presentati nel corso dell'udienza preliminare di Berna e nelle sei udienze in Colombia, così come le decisioni formulate dalle giurie che hanno presieduto ciascuno di questi eventi, sono parte integrante di questo giudizio e sono disponibili alla pagina web www.internazionaleleliobasso.it

I materiali originali, scritti, orali e visuali, che hanno sostenuto il rinvio delle accuse alla sessione deliberante sono consultabili presso gli archivi del TPP.

1.3 Procedimenti relativi alla sessione finale

Secondo quanto stabilito nei suoi statuti, il TPP ha notificato la realizzazione della sessione conclusiva del processo a tutti gli attori coinvolti, invitandoli a esercitare il diritto di difesa, per mezzo di documenti e/o memorie inviati all'attenzione della giuria, o presentandosi di persona.

Nello specifico, le notifiche sono state consegnate al presidente della Repubblica colombiana, Álvaro Uribe Vélez; alle imprese transnazionali (e alle industrie nazionali aventi stretti vincoli con le transnazionali) rinviate al termine delle udienze preliminari al giudizio definitivo; ai rappresentanti degli Stati dove hanno sede le case madri delle multinazionali. Due imprese (che non erano state peraltro giudicate rinviabili a giudizio finale) hanno inviato le proprie motivazioni di difesa. Altre quattro imprese transnazionali hanno risposto sostenendo la mancanza di competenza giuridica formale di un tribunale di opinione, e la propria disponibilità a osservare solamente impegni volontari (come quelli del Global Compact).

Le compagnie prese in esame in questo giudizio (secondo l'ordine in cui sono state presentate nel corso delle udienze preliminari) sono: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Keshada, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Pizano S.A. e la sua filiale Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filiale della transnazionale Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – cobre y oro de Colombia S.A.

La realizzazione di questa udienza deliberante è stata notificata anche alle alte corti rappresentate da Rodrigo Escobar Gil, presidente della Corte Suprema di Giustizia, Enrique Gil Botero, presidente del Consiglio di Stato, Hernando Torres Corredor, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Humberto Antonio Sierra Porto, presidente della Corte Costituzionale. Allo stesso modo sono stati invitati a questa udienza in qualità di direttori di organismi di controllo Edgardo Maya Villazón, Procuratore Generale della Nazione e Volmar Pérez Ortiz, Difensore Civico Nazionale.

Le udienze pubbliche di questa sessione del TPP si sono svolte secondo il programma di cui all'allegato 1, nei giorni 21 e 22 luglio 2008. La lettura pubblica della sentenza è stata fatta presso l'Auditorio León de Greiff della Universidad Nacional de Colombia, alle 16:00 del giorno 23 luglio 2008, con una presenza complessiva di più di 3000 persone.

1.4 La giuria

La giuria è stata composta dai seguenti membri del Tribunale:

- **Adolfo Pérez Esquivel** (Argentina), Premio Nobel per la Pace 1980, che ha presieduto il Tribunale.
- **Dalmo de Abreu Dallari** (Brasile), professore di Diritto presso l'Università di San Paolo, membro della Commissione Internazionale di Giuristi, membro del Consiglio di Difesa dei Diritti dell'Uomo della Presidenza della Repubblica del Brasile.
- **Marcelo Ferreira** (Argentina), professore di Diritti umani della facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Buenos Aires.
- **Francois Houtart** (Belgio), sociologo, presidente del Centro Tricontinentale di Lovanio (Cetri); membro del Comitato esecutivo del Forum Sociale Mondiale.
- **Franco Ippolito** (Italia), magistrato della Corte Suprema di Cassazione italiana, già presidente di Magistratura Democratica e della Associazione italiana dei Giuristi Democratici; è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura.
- **Lorenzo Muelas Hurtado** (Colombia), autorità tradizionale del popolo Guambiano, ex membro dell'assemblea costituente ed ex senatore indigeno, Dipartimento del Cauca.
- **Juana Manquecura Aillapàn** (Cile), autorità ancestrale del popolo Mapuche, medico *lawentuchefe*, membro del Parlamento del Koz-cok Mapu.
- **Vilma Núñez de Escorcía** (Nicaragua), Vicepresidente della Corte Suprema di Giustizia del Nicaragua (1979-1988), Presidente del Centro Nicaraguense di Diritti Umani (CENIDU); dal 1990, Vicepresidente della Federazione Internazionale di Diritti Umani.
- **Antoni Pigrau Solé** (Spagna), Cattedratico di Diritto Internazionale Pubblico presso l'Università Rovira i Virgili di Tarragona.
- **Bruno Rütscbe** (Svizzera), segretario del Gruppo di Lavoro Colombia-Svizzera, Pace e Diritti Umani.
- **Philippe Texier** (Francia), Magistrato della Corte di Cassazione francese e presidente del Comitato sui Diritti Economici Sociali e Culturali delle Nazioni Unite.
- **Gianni Tognoni** (Italia), direttore di ricerca in epidemiologia e salute pubblica e Segretario generale del Tribunale Permanente dei Popoli.

A conclusione di questa sessione, il Tribunale Permanente dei Popoli vuole ricordare uno dei suoi membri, Eduardo Umaña Mendoza, colombiano, che era stato relatore principale nella già citata sessione del 1989, assassinato in Colombia il 18 aprile 1998, vittima dello stesso processo di violenza e di impunità che è oggetto di questa sessione.

2. CONTESTO POLITICO

Sin dall'indipendenza, la Colombia si è contraddistinta per una dualità sociale: da un lato, il monopolio dei poteri economici, politici, culturali nelle mani di una minoranza, essenzialmente urbana e, dall'altro, grandi masse rurali costrette a vivere a limite della sussistenza. L'ingiustizia sociale, imperante già dall'epoca coloniale, si è radicata durante il periodo neoliberale. Secondo il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del 2007, 17 milioni di colombiani e colombiane vivono in condizioni di povertà, 6 milioni si trovano in stato di indigenza, dovendo vivere con meno di un dollaro al giorno, e la distanza tra ricchi e poveri cresce sempre di più.

La Colombia ha uno degli indici di disuguaglianza più alti dell'America Latina, essendo un Paese ricco con una crescita annuale del 7%. La logica neoliberale che promuove una crescita vertiginosa di circa il 20% della popolazione si applica perfettamente al Paese. Lo 0,3% della popolazione è proprietaria di più della metà delle terre agricole.

Dal punto di vista politico, due partiti, quello liberale e conservatore, espressione della borghesia e dell'oligarchia, hanno governato il Paese dal XIX secolo, alternandosi in maniera più o meno regolare, stipulando, a volte, un patto ufficiale per dividersi il potere (si tratta del periodo conosciuto come *Frente Nacional*). Ogni manifestazione di alternativa politica è stata sempre ostacolata. Ogni volta che un leader politico riusciva a rappresentare la speranza di un cambiamento reale, veniva assassinato: sono i casi di Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Galán e, recentemente, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongomez o Bernardo Jaramillo.

I tentativi di ritorno alla vita politica di alcuni gruppi armati, come per esempio il gruppo M19, sono stati ostacolati con l'assassinio di numerosi leader e militanti del gruppo. Il caso più drammatico e rappresentativo di questa volontà di impedire qualsiasi alternativa politica è l'eliminazione fisica di più di 3000 quadri dirigenti del partito dell'Unión Patriótica, alla quale si fa più ampio riferimento nella sezione sul genocidio politico.

L'ingiustizia sociale e l'impossibilità di una alternativa reale spiegano, insieme ad altri fattori, la nascita dei movimenti insorgenti armati all'inizio degli anni '60, successivi alla vera e propria guerra civile scatenatasi tra liberali e conservatori

dopo l'assassinio di Gaitán, conosciuta come periodo di *La violencia*, che causò 300 mila morti.

A partire dagli anni '60, l'affermarsi del narcotraffico come sistema che è parte integrante delle strutture sociali ed economiche del Paese, ha fatto sì che questo si trasformasse in una componente importante della realtà politica ed economica colombiana. È ben noto il ruolo di cartelli; i guadagni derivanti dall'attività illegale sono penetrati nell'intera struttura economica, grazie al riciclaggio del denaro nel sistema finanziario, nell'edilizia e in quasi tutti i settori dell'economia, addentrandosi persino nel sistema politico e in tutta la società: forze armate, parlamento, giustizia, governo.

Gran parte dei movimenti insorgenti hanno avuto rapporti stretti con il narcotraffico, passando da una fase iniziale di tolleranza verso i narcotrafficcanti, ad un periodo di fruizione di benefici indiretti, per divenire infine anche produttori. Durante il conflitto durato più di quarant'anni, i metodi dei gruppi insorgenti, e in particolare delle FARC EP sono degenerati considerevolmente: dalle imposte riscosse ai narcotrafficcanti ed alle imprese nazionali o transnazionali, fino ai sequestri, politici o puramente economici, al reclutamento di bambini e bambine, alle esecuzioni sommarie.

Dagli anni '60, prima ancora dell'apparizione dei gruppi guerriglieri, una missione militare degli Stati Uniti ha obbligato i governi colombiani ad adottare una strategia paramilitare per combattere le ideologie dissidenti, che ha legalizzato progressivamente il suo operato, affermandosi a partire dagli anni '80 e '90 fino ai nostri giorni. Questi gruppi paramilitari sono riusciti a controllare interi territori e hanno utilizzato i metodi più diversi e feroci della repressione della popolazione civile: massacri collettivi indiscriminati o selettivi, sparizioni forzate, violazioni sessuali contro le donne e appropriazione di terre collettive appartenenti a comunità contadine, nere e indigene.

Dall'inizio del conflitto armato gli aiuti statunitensi sono andati progressivamente crescendo accentuandosi negli ultimi anni con il pretesto della lotta al narcotraffico, che dal 1998 prende il nome di Plan Colombia, trasformatosi rapidamente in un piano di lotta contro l'insorgenza. Il Plan Patriota e la consolidazione del Plan Colombia perseguono lo stesso obiettivo.

Nel 2002, con l'elezione di Álvaro Uribe Vélez, il conflitto si è esteso a una fascia importante della società civile per mezzo della politica di "sicurezza democratica". L'obiettivo di questa politica è la soluzione militare del conflitto, con l'adozione di modalità operative che coinvolgono direttamente la popolazione civile nella guerra: le reti di informanti e la formazione di contadini soldati, en sono esempio.

Dal 2004 è stato avviato un processo di smobilitazione dei paramilitari, sostenuto da varie misure legislative considerate da molte organizzazioni per i diritti umani una forma di amnistia camuffata, destinata a garantire impunità ai paramilitari. La Legge 975 del 25 luglio 2005, denominata *Ley de Justicia y Paz*, ha permesso, nonostante la sospensione di varie decisioni della Corte costituzionale nel 2006, che i principali capi paramilitari non incorrano nelle

sanzioni previste per quei crimini di particolare gravità. Questo processo di impunità è culminato nel dicembre 2008 con l'estradizione di 14 capi dell'Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), che ha permesso loro di eludere le proprie responsabilità rispetto alle vittime dei crimini da loro commessi.

La complicità tra l'apparato statale, civile o militare, e il paramilitarismo, da sempre negata dal Governo, è risultata evidente nelle indagini ufficiali in corso su decine di paramilitari del gruppo uribista, che coinvolgono direttamente il cugino del presidente della Repubblica per collaborazione con i gruppi paramilitari. In questo momento, 37 paramilitari si trovano in carcere, tra cui il fratello dell'ex Ministro degli Affari Esteri. Tra le due alternative possibili, quella di negoziare con l'insorgenza e quella di allearsi con i paramilitari, il governo ha scelto, senza ombra di dubbio, la seconda.

3. IMPRESE TRANSNAZIONALI

Alla tribuna di queste udienze si sono presentate e hanno preso la parola susseguite numerose organizzazioni di vittime che hanno fornito ai giudici quelle informazioni che non superano quasi mai le barriere dei mezzi di comunicazione di massa: il *modus operandi* delle imprese transnazionali; la portata dei loro capitali; gli indici incredibili della loro redditività; la diversificazione delle filiali; i meccanismi tecnici che mimetizzano la loro irresponsabilità, come per esempio, i cambiamenti permanenti della ragione sociale, il trasferimento costante di capitali per evadere carichi tributari, legislazioni svantaggiose o rischi di contrattazione dei loro guadagni; le conseguenze disastrose sull'ambiente; la persecuzione e lo sterminio dei sindacati; la messa a servizio, attraverso l'erogazione di incentivi massicci, della Forza pubblica dello Stato, disegnata per proteggere tutta la società; la contrattazione clandestina di gruppi paramilitari; le esecuzioni extragiudiziarie dei sindacalisti dissidenti, dei componenti dei movimenti sociali che si oppongono alle pratiche violatrici dei diritti, come le riduzioni arbitrarie della forza lavoro, i sistemi di contrattazione indiretta e la conseguente precarizzazione dei lavoratori, l'alterazione dei prodotti con gravi rischi anche per la salute dei consumatori.

Tutto questo processo ha potuto svilupparsi grazie al vuoto legislativo che garantisce libertà al capitale, e non di rado statuti normativi disegnati ed elaborati dalla stessa impresa transnazionale per trasformarli in legge nazionale, come nel caso esemplare del codice minerario.

In queste udienze, si è dato ascolto, oltre alle testimonianze di specialisti ed esperti, alla memoria di numerose vittime che hanno permesso di avere una visione analitica e qualitativa della politica delle imprese e dello Stato colombiano, il quale spesso, su pressioni degli organismi multilaterali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca internazionale dello Sviluppo, impone le regole del capitale al di sopra di qualsiasi valore umano e sociale e della vita stessa. Sono stati ricordati, insieme a molti altri, i sindacalisti delle imprese Coca Cola, Nestlé, Drummond; gli 80 contadini afrodiscendenti e indigeni sacrificati dalla *Operación Génesis*, che "ha pulito" i

territori ancestrali prima dell'arrivo delle imprese del legno e della palma, le quali hanno distrutto la biodiversità della regione del Pacifico; i numerosi indigeni sacrificati durante le lotte del Cauca per la liberazione della Madre Terra; le innumerevoli vittime delle zone indigene protette e comunità contadine sacrificate dal paramilitarismo al servizio delle imprese petrolifere e minerarie come Anglo Gold Ashanti, Kedhadha, British Petroleum nel Sur de Bolívar, nel Casanare, nel Putumayo, nel Massiccio_colombiano, nell'Eje cafetero; le innumerevoli vittime dell'Urabá, del Bajo Atrato e del Magdalena, tutti quelli che i paramilitari finanziati con i soldi della Chiquita Brands e altre multinazionali hanno ucciso, fatto sparire o sfollato; le centinaia di migliaia di persone, intere popolazioni che hanno visto deteriorarsi visibilmente la loro qualità della vita, da quando imprese come l'Unión Fenosa, Canal Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona, hanno comprato le imprese locali dell'acqua e dell'energia, subordinando alle regole del rendimento privato servizi che toccano tanto a fondo la qualità della vita.

Le pratiche economiche, sociali e politiche delle imprese multinazionali in Colombia sono simili a quelle che si conoscono nel resto del mondo, anche se queste si adattano alle circostanze concrete di ogni Paese o regione. Il potere di queste imprese è aumentato a partire dagli anni '70 quando, di fronte ad un decrescente tasso di benefici, si è optato per una liberalizzazione generalizzata dell'economia mondiale.

Le nuove tecnologie di informazione e comunicazione hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, dando particolare vantaggio al capitale finanziario. Il risultato è stato quello di una concentrazione sempre più forte delle attività economiche nelle mani delle imprese transnazionali e la subordinazione alle leggi di mercato di vari settori quali l'agricoltura, i servizi pubblici, i saperi tradizionali, applicando solamente la logica di massimizzazione dei profitti e di accumulazione del capitale.

Secondo alcuni studi presentati al Tribunale, il primo momento di grande espansione degli investimenti stranieri in Colombia risale agli anni Cinquanta quando, obbedendo a una missione inviata dal governo degli Stati Uniti, gli investimenti stranieri sono stati destinati a molti rami dell'economia. Allora, l'assessore tecnico Lauchlin Currie, considerava come asse della sua strategia lo spopolamento delle terre e l'urbanizzazione intensiva, per ottenere i quali sosteneva: "la guerra può prendere il posto di un programma di mobilità accelerata". Di fatto, questo modello di sviluppo si è imposto in un contesto di estrema violenza.

Tra gli anni 1978-1985 gli investimenti stranieri in Colombia sono cresciuti più di dieci volte, passando da 65 a 670 milioni di dollari, concentrandosi principalmente nel settore minerario e petrolifero. Viene imposto in quegli anni un modello brutale e spietato di egemonia e accumulazione sostenuto dalla violenza narco-paramilitare e dal terrorismo di stato, senza alcun controllo democratico.

Negli anni '90 sono stati introdotti ulteriori e significativi cambiamenti nella legalizzazione degli investimenti stranieri, come anche in quella che regolava lo

sfruttamento degli idrocarburi. Si è instaurato un nuovo regime cambiario che ha permesso un trattamento tale agli investimenti stranieri che li equiparava a quelli nazionali, garantendo facile accesso ai sussidi dello Stato, alle sue linee di credito e l'uso di sistemi speciali di importazione/esportazione incentivati dallo Stato. Gli investimenti, provenienti per la maggior parte da paradisi fiscali, si concentrano nella finanza, servizi pubblici, industria, settore minerario e idrocarburi. In questo periodo gli investimenti stranieri passano da 500 milioni di dollari del 1990 a 6.966 milioni del 1997, che equivale a una crescita del 1.300%.

Nel 1996, un rapporto dell'Ambasciata degli Stati Uniti affermava: "la guerra ha minato la fiducia degli investitori". Nonostante questa affermazione non corrispondesse all'altissimo livello di investimenti stranieri di quel periodo, ha però determinato una nuova politica da parte del governo caratterizzata dall'ossessione di generare sicurezza, fiducia e stabilità per gli investimenti stranieri. Così si è venuta a creare una nuova strategia che ha relegato lo Stato al servizio delle multinazionali, con ulteriori enormi vantaggi agli investitori, e la corrispondente riduzione dei diritti dei lavoratori ed la soppressione di molti diritti politici. Tutto questo ha trovato applicazione nella cosiddetta "politica di sicurezza democratica", perno centrale della politica attuale del governo, e nel Plan Colombia, che hanno causato una maggiore ingerenza militare e politica degli Stati Uniti in Colombia, grazie alla presenza di imprese militari private che operano sulla falsariga del modello di mercenariato internazionale. Questo periodo, prolungatosi fino ad oggi, ha registrato la cifra più alta di investimenti stranieri nella storia del Paese: nel 2000 questa cifra è salita a 3768 milioni di dollari e nel 2005 ha raggiunto i 10.085 milioni. Il volume di affari all'estero ha raggiunto 673 milioni di dollari nel 2000 e 6.535 milioni di dollari nel 2007, registrando una crescita quasi del 1000%. Questo periodo si caratterizza anche per la vendita massiccia delle imprese statali a investitori stranieri, che hanno ufficialmente portato allo Stato, solo negli anni Novanta, 12.406 milioni di dollari.

La cessione delle imprese statali a investitori stranieri non poteva avvenire senza grandi meccanismi di corruzione, come il pagamento di tangenti a funzionari che hanno autorizzato la privatizzazione; la svendita e la riduzione dei loro attivi prima della loro vendita; il pagamento "leonino" legato ai livelli di redditività, eccetera. Secondo uno studio della Banca Mondiale di qualche anno fa, i guadagni derivati dalla corruzione statale in Colombia arrivavano a 2.800 milioni di dollari ogni anno.

È ben nota anche la forma di ingerenza nelle questioni di politica interna da parte dei Paesi in cui si trova la casa madre delle multinazionali, attraverso la loro rinuncia ad imporre alle imprese il rispetto degli standard internazionali dei diritti umani che sono obbligatori nei Paesi di origine.

L'appropriazione dei mercati nazionali, dell'infrastruttura e delle finanze da parte dei capitali esteri, è stata accompagnata da forme brutali di violenza contro i lavoratori, soprattutto quelli sindacalizzati, e contro la popolazione in generale, beneficiaria di molti servizi. Sono state approvate leggi lesive dei diritti dei lavoratori, che hanno negato loro quasi tutti i diritti conquistati in molti anni. L'atmosfera di terrore all'esterno e all'interno delle imprese è stata generata

dall'azione dei gruppi paramilitari e dei servizi di sicurezza dello Stato stesso, autori di un vero e proprio genocidio che è costato la vita a circa 4.000 sindacalisti in 20 anni, a più di 4 milioni di sfollati e a 5 milioni di colombiani costretti ad abbandonare il proprio Paese. Molti ancora hanno subito attentati, detenzioni arbitrarie, torture, minacce di morte. È in questa cornice di terrore che sono state introdotte la contrattazione a tempo, la terzizzazione fino a forme di lavoro para-schiavistico. Attualmente, il 32% dei lavoratori non ha nessuna copertura contrattuale, il 60% lavora in settori informali e il 44% non ha accesso ai sistemi di sicurezza sociale.

La logica di questa gestione dell'economia in Colombia è espressione massimamente esemplare di quella globale che, invece di promuovere una distribuzione più equa della ricchezza, la salvaguardia dell'ambiente e la soddisfazione delle necessità più elementari della maggioranza, punta a una più rapida rotazione di capitale e processi di accumulazione, a favore di quella parte della popolazione, ovvero il 20%, in grado di consumare beni e servizi di lusso. Secondo il rapporto della FAO, solo nel 2007, il numero di persone a livello di fame è aumentato di 50 milioni. È un dato di fatto che il diritto internazionale si sia adattato agli interessi delle imprese transnazionali, come dimostrano le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Va inoltre sottolineato che molte imprese transnazionali presenti in Colombia operano in altri Paesi generando effetti e conseguenze simili. È così che, in passato, le multinazionali hanno appoggiato le dittature militari in molti Paesi dell'America Latina. In Indonesia, le imprese della palma e quelle del legno hanno distrutto più dell'80% della selva originaria ed espulso 6 milioni di abitanti con l'aiuto dei paramilitari. In Congo, le due guerre che si sono succedute, hanno causato 4 milioni di morti, la maggiorparte dei quali dovuti al controllo delle ricchezze minerarie sfruttate dalle imprese che operano anche in Colombia, come Anglo Gold Ashanti, Angloamerican, Glencore Xstrata, spesso con il sostegno di eserciti illegali.

4. FATTI DOCUMENTATI

Grazie alle testimonianze addotte, orali e scritte, nel corso delle udienze il Tribunale ha potuto farsi un'idea della portata estremamente grave delle violazioni dei diritti umani in Colombia, che dimostra l'esistenza di un quadro generalizzato di violazioni della maggiorparte dei diritti umani, che coinvolgono vasti settori della società.

Non essendo possibile riportare in questa sede tutte le violazioni in maniera dettagliata ed esaustiva, si fornirà una descrizione generale delle diverse modalità delle violazioni individuate e si indicheranno i casi più gravi ed emblematici.

I fatti di seguito esposti, sono raggruppati in cinque paragrafi: diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali; diritto all'ambiente; diritti collettivi dei popoli indigeni e, infine, impunità.

4.1 Diritti civili e politici

L'insieme delle evidenze presentate devono essere considerate probatorie di una serie di violazioni dei diritti civili e politici, in cui rientrano:

4.1.1 Diritto alla vita e all'integrità fisica

La Colombia è un Paese altamente militarizzato con un budget che nel 2007 ha raggiunto il 5% del PIL, triplicandosi nel 2008 fino ad arrivare al 6.5%. È stato previsto, tra il 2007 e il 2010, un investimento militare di 57,9 mila miliardi di pesos colombiani. Il numero totale di componenti dell'esercito e della polizia corrispondeva, nel 2004, a 250.000 unità. Nel 2008 la cifra ha raggiunto le 430.000 unità, senza contare le 600.000 appartenenti al settore della sicurezza privata.

Negli ultimi dieci anni ci sono state centinaia di migliaia di morti, 300.000 riconosciuti ufficialmente, metà dei quali sono di responsabilità dei gruppi paramilitari. Negli ultimi 20 anni, circa 4000 sindacalisti sono stati uccisi, cifra che di per sé dimostra il grave rischio in cui incorrono i difensori dei diritti dei lavoratori in Colombia. Contemporaneamente, migliaia di indigeni e contadini sono stati assassinati durante le campagne di terrore che li obbligavano ad abbandonare le terre.

Nel periodo compreso tra giugno-luglio 2002 e luglio 2006, 11.292 persone sono state assassinate o scomparse (al di là dei bilanci ufficiali degli scontri), ciò corrisponde ad una media di 7.8 morti al giorno. È stato riconosciuto che il 75.1% di queste morti è di responsabilità dello Stato, di cui il 14.1% (908 vittime) per azione diretta, il 60.9% (3.907 vittime) per tolleranza o complicità verso violazioni commesse da gruppi paramilitari. Alla guerriglia si attribuisce il 24.8% (1.591 vittime). In totale, se si considerano i morti in combattimento, la cifra raggiunge 20.102 persone, che equivale a una media di 14 persone al giorno.

La media annuale di violazioni del diritto alla vita (esecuzione extragiudiziarie e sparizioni forzate), attribuibili direttamente ad agenti statali, ha raggiunto il 73% passando da 131 a 227 nell'arco di tempo considerato.

Ogni anno i paramilitari hanno assassinato o fatto sparire 1.060 persone, per un totale di 3.005 persone uccise, delle quali 687 bambine e bambini e 52 difensori dei diritti umani. Tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2007 sono stati registrati 131 episodi conosciuti come *falsos positivos*, nei quali hanno perso la vita 211 persone, altre 20 sono state torturate e altre 15 ferite.

La dinamica di violazioni dei diritti umani ha trovato terreno fertile nella cosiddetta politica di sicurezza democratica, che promuove l'ingerenza di privati nelle questioni di sicurezza, annullando di fatto la distinzione tra combattenti e popolazione civile, principio cardine del diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto armato (Articolo 214.2 della Costituzione politica della Colombia; articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocollo

addizionale II del 1977). L'articolo 214.2 della Costituzione colombiana dispone che "in ogni caso saranno rispettate le regole del diritto internazionale umanitario". La Corte Suprema della Colombia, nelle sentenze C-574/92 e C-088/93, ha affermato che i protocolli addizionali del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 fanno parte dello *ius cogens* e in esso sono contenute le garanzie per la protezione delle vittime nei conflitti armati interni e che nel costituzionalismo colombiano il diritto internazionale umanitario deve essere inteso in maniera più ampia, includendo il diritto dei conflitti armati, il quale comprende i due settori tradizionali del diritto internazionale umanitario, in senso stretto, e del diritto di guerra. Secondo la Corte, "il diritto internazionale umanitario contiene norme che limitano il diritto delle parti in conflitto di scegliere liberamente i mezzi e i metodi utilizzati nei combattimenti, così come disposizioni dirette a proteggere le vittime e i beni suscettibili di essere colpiti da un conflitto armato" (C-574/92 M.P. Ciro Angarita Barón). Questa affermazione è valida per tutte le parti in conflitto.

Il Tribunale inoltre considera accertata l'esistenza di un sistema diffuso di relazioni tra la struttura dello Stato colombiano e l'operato dei gruppi armati paramilitari. È sufficiente menzionare in questa sede la legislazione che ne ha facilitato la creazione, le numerose dichiarazioni dei membri di questi gruppi e di quelli delle forze armate, in cui si riconosce la loro reciproca collaborazione, le disposizioni legislative e i provvedimenti giudiziari tesi a facilitare l'impunità dei suoi membri. Numerosi rapporti sulle violazioni dei diritti umani provenienti da fonti intergovernative e non governative, così come diverse sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani lo confermano. Si può menzionare, in questa sede, la sentenza del 5 luglio 2004, relativa al caso "19 comerciantes", la sentenza del 12 settembre del 2005, relativa al caso "Gutiérrez Soler", la sentenza del 15 settembre 2005, relativa al caso del "Masacre de Mapiripán", la sentenza del 31 gennaio 2006, relativa al caso del "Masacre de Pueblo Bello" e la sentenza del 1 giugno 2006, relativa al caso del "Masacre de Ituango". In Colombia sono stati commessi numerosi massacri di cui è a conoscenza l'opinione pubblica, alcuni registrati in occasione di grandi operazioni militari, come l'*Operacion Génesis*, nelle regioni del Chocó e Urabá e *Tormenta del Atrato*, nell'Atrato, o il *Borrasca 1*, nel territorio appartenente al popolo Sikuani, dove si sta realizzando il progetto petrolifero del blocco Capachos, di proprietà della Repsol. Tra i massacri rientrano quelli di Honduras e La Negra, Ariari, Trujillo, Campo Hermoso, Río Sucio, Mapiripán, Pueblo Bello, la Rochela, Bahía Portete, Santo Domingo, La Cabuya, Tame (località Flor Amarillo, Piñalito e Clavo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, Mulatos e La Resbalosa a San José de Apartadó, La Unión, El Aro e La Granja, o EL Tigre.

Il 20 luglio, contemporaneamente alla manifestazione di massa a favore della libertà dei sequestrati e in piena sessione del Tribunale, è

stato compiuto un nuovo massacro di contadini a Puerto Libertador, Córdoba. Va sottolineata, inoltre, la persecuzione subita dalla Comunità di Pace di San José de Apartadó, particolarmente punita per aver assunto una posizione netta di non collaborazione con gli attori armati. Tra i leaders sindacali assassinati, il Tribunale ricorda i membri del sindacato Sintramienergética, i lavoratori dell'impresa Drummond, nella regione del Cesar, Cándido Méndez, Manuel Enrique Charris Ariza, Valmore Lacarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora. i dirigenti del sindacato Uso, dell'impresa Ecopetrol di Barrancabermeja, Santander, Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higueta, Auri Sará Marrugo y Enrique Arellano. i dirigenti del sindacato Sinaltrainal Avelino Achicanoy Erazo, José Eleasar Manco David, Luis Enrique Giraldo Arango, Luis Enrique Gómez Granado, Isidro Segundo Gil Gil, Guillermo Gómez Maigual, Adolfo de Jesús Munera López. i dirigenti del sindacato Sintraelec Iván Franco, Javier Jonás Carbono Maldonado; Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez; Víctor Carrillo, Martín Contreras Quintero, Adán Alberto Pacheco Rodríguez.

Tra i dirigenti dei movimenti sociali assassinati, la cui responsabilità è stata attribuita all'impresa British Petroleum Company, si possono ricordare i casi di Carlos Mesías Arriguí, Daniel Torres, Roque Julio Torres, Oswaldo Vargas y Carlos Hernando Vargas Suárez.

L'estrema crudeltà di alcuni assassinii è particolarmente evidente nel caso di Marino López Mena, il quale, durante l'*Operación Génesis*, è stato assassinato dai paramilitari che hanno giocato a calcio con la sua testa dinanzi alla comunità.

Sono numerosi i casi di persone ferite, mutilate o torturate nel corso di questi ultimi anni, oltre a quelle che sono state vittime delle mine antiuomo. Il popolo Awá della regione del Nariño è particolarmente colpito da questo problema, ma non è il solo.

Un caso particolarmente emblematico è il processo di sterminio del gruppo politico Unión Patriótica, che fino ad ora ha causato un totale di 2.350 omicidi, 415 sparizioni forzate e 377 vittime di violazioni al diritto dell'integrità della persona (che includono superstiti di attentati e vittime di tortura), oltre a minacce, sfollamento forzato e detenzioni arbitrarie.

Tra le imprese particolarmente coinvolte in questo enorme dramma di morte il caso più rappresentativo può essere considerato quello dell'Occidental Corporation, generalmente conosciuta come OXY, che Occidental Andina. Questa impresa è stata promotrice del "Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado", meglio conosciuto come Plan Colombia. Beneficiaria diretta di assistenza militare nell'ambito del suddetto Piano, l'impresa possiede piste di atterraggio che sono utilizzate per le operazioni militari e fa parte,

come unica impresa presente, di organismi ufficiali di coordinamento di tutta la strategia militare del Plan Colombia, come il Centro de Coordinación de Acción Integral, insieme, tra le altre istituzioni, al Governo colombiano, all'Ambasciata degli Stati Uniti, USAID e al Comando Sud dell'esercito degli Stati Uniti. Tra le sue funzioni vi è quella di essere il Centro Interistituzionale diretto dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione dell'Ambasciata degli Stati Uniti e del Comando Sur, che garantisce legittimità, governabilità e presenza dello Stato in zone strategiche del territorio nazionale recuperate dalle Forze militari e dalla Polizia, e che promuove azioni articolate di natura economica e sociale, per integrare la Politica di Difesa e Sicurezza Democratica nell'ambito del Recupero Sociale del Territorio.

4.1.2 Diritto alla libertà e alla libera circolazione

In Colombia si stima che vi siano all'incirca 4 milioni di sfollati interni e, con ogni probabilità, il numero di persone costrette ad abbandonare il Paese per ragioni politiche o economiche non è inferiore. È stato calcolato che lo sfollamento ha interessato circa 4 milioni di ettari di terra espropriati illegittimamente, che equivale a un terzo della superficie coltivabile in Colombia. Questo territorio coincide con le aree in cui sono presenti numerosi gruppi paramilitari.

L'esplorazione e lo sfruttamento petrolifero hanno causato, per esempio, sfollamento, espulsione e, in alcuni casi, quasi l'estinzione di numerose comunità indigene dai loro territori ancestrali. L'occupazione e la distruzione delle loro terre stanno condannando molte di queste comunità all'estinzione. È il caso delle comunità U'wa, Sikuanes, Macaguanes, Cuibas, Guahibos, Betoyes, Barí, Cofanes, Nasa, Inga, Embera, Embera Chamí, Siona, Awá, Pastos, Camsá, Yanacona, Camentzá.

Nel 1997 la popolazione afrocolombiana delle comunità di Curvaradó e Jiguamiandó, nella regione del Chocó, è stata cacciata dal suo territorio dal blocco paramilitare Elmer Cárdenas. Il territorio collettivo di queste comunità è stato poi occupato illegalmente dalle imprese produttrici di palma africana, Multifruits e Urapalma, e dall'impresa del legno, Maderas del Darién. Il legame diretto tra noti capi paramilitari e queste imprese è evidente. Le comunità del Chocó hanno denunciato l'esistenza di una recente campagna mediatica intenzionata a delegittimare, mistificare, capovolgere la realtà dei fatti, dipingendo le vittime come carnefici. Gli sfollati che cercano di recuperare le proprie terre, le organizzazioni religiose locali che li proteggono sono presentati infatti come usurpatori illegittimi legati alla guerriglia. Queste false informazioni sono state riprese e diffuse dai mezzi di comunicazione di massa, senza una seria verifica delle fonti, fatto che colloca gli sfollati del Chocó nella tragica condizione di doppia perdita delle terre.

Per quanto riguarda le violazioni alla libertà, le testimonianze presentate al Tribunale hanno dimostrato l'esistenza di numerosi casi di detenzioni massive e arbitrarie, di sequestri, sparizioni forzate, e arruolamento forzato, attribuiti tanto all'esercito quanto ai gruppi paramilitari.

Come è risaputo, la guerriglia ha messo in atto una strategia di sequestri di civili a scopi economici o politici, pratica disapprovata in maniera esplicita dal Movimento delle vittime di crimini di Stato, che ha chiesto alla guerriglia di

riconsiderare i suoi metodi. Azioni militari di questo tipo contro la popolazione civile sono contrari al diritto internazionale umanitario.

La vulnerabilità del diritto alla libera circolazione è presente anche nelle "zone di esclusione" situate nei pressi dei grandi sfruttamenti petroliferi o minerari, in cui vige uno stato di guerra virtuale sotto il controllo diretto delle forze armate e di sicurezza privata. Questa situazione è aggravata dall'arbitrarietà dei controlli militari lungo le strade di transito e dalle restrizioni alla circolazione di beni alimentari, medicine ed altri beni di prima necessità, che colpiscono comunità rurali molto povere. Queste condizioni di confinamento forzato sono imposte anche da altri attori armati.

Infine, è essenziale sottolineare il paradosso che si è creato con il processo di criminalizzazione e incriminazione di dirigenti sindacali, sociali, o indigeni, avente come obiettivo quello di neutralizzare le proteste sociali. I processi si sono spesso conclusi con sentenze di condanna sulla base di falsi documenti e hanno previsto costi economici difficilmente sostenibili dalle vittime.

4.1.3 Diritti delle donne

Le donne hanno subito le stesse violazioni dei diritti fondamentali denunciate in altri paragrafi. Non sono mancate, comunque, violazioni specifiche dei diritti delle donne, soprattutto per quanto riguarda il loro diritto alla libertà sessuale. Numerosi sono stati gli stupri, le aggressioni sessuali e altre forme di violenza e di maltrattamenti. È emblematico il caso del massacro di Bahía Portete, in cui sono state assassinate donne del popolo Wayuú, una comunità indigena conosciuta per la sua organizzazione matriarcale e per la protezione speciale di cui godono le donne.

4.1 Diritti economici, sociali, e culturali.

Nel corso delle udienze sono state presentate evidenze probatorie di una serie di violazioni dei diritti economici, sociali, e culturali, di cui si riportano gli elementi essenziali:

4.2.1 Diritti sindacali

Sono state illustrate ai membri della giuria le politiche di alcune imprese che di certo non perseguono il miglioramento delle condizioni di vita dei loro lavoratori, ma esclusivamente la logica dell'efficienza economica. Per il raggiungimento di maggiori benefici, le imprese ricorrono a qualsiasi tipo di attività legale, paralegale o illegale che ignora in modo assoluto tanto i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie, sanciti in numerosi strumenti giuridici internazionali, quanto l'interesse e il rispetto per le comunità nel cui territorio le stesse imprese operano. Di fatto si verifica una persecuzione sistematica di qualsiasi forma di attività sindacale, che rientra nel quadro di una politica di precarizzazione del lavoro e smembramento delle reti di sicurezza sociale, attraverso licenziamenti di massa ed esternalizzazione dei servizi per diluire le responsabilità dell'impresa principale. È in questo contesto che si inserisce il

processo di smantellamento dell'Unión Sindical Obrera, del sindacato Ecopetrol, i cui leader principali sono stati assassinati, e dell'annichilamento del sindacato Sinaltrainal della fabbrica Cicolac-Nestlé. Durante l'udienza sui servizi pubblici sono state sottoposte all'attenzione della giuria le immagini di alcuni filmati che hanno mostrato la brutalità con cui la polizia ha represso la protesta dei lavoratori dell'impresa Aguas de Cartagena, filiale della multinazionale Aguas de Barcelona (AGBAR).

È stata provata la simbiosi esistente tra la struttura dello Stato colombiano e alcune delle imprese multinazionali, particolarmente evidente nelle nomine dei dirigenti statali e aziendali e nell'assegnazione delle cariche: per esempio, ad alcuni funzionari della Nestlé sono state direttamente affidate alte cariche all'interno del Ministero della Solidarietà Sociale; un ex Procuratore Generale che si era negato nell'esercizio delle sue mansioni a indagare sulle numerose denunce dei sindacalisti della Coca Cola, ha poi lavorato come avvocato per questa impresa nei processi del 2003 contro i dirigenti del sindacato. Questa simbiosi si traduce nei fatti in una subordinazione dello Stato alle richieste, le necessità o gli interessi delle imprese transnazionali ed è documentabile in tutti i poteri dello Stato. A livello legislativo, attraverso l'adozione di norme dirette a ostacolare la libertà sindacale, a deregolarizzare la contrattazione e, nella pratica, a smantellare il diritto del lavoro. A livello giudiziario, attraverso l'interruzione di cause aperte dai rappresentanti dei lavoratori e attraverso la cooperazione nelle strategie di intimidazione giudiziaria, come quella che sta portando avanti la Coca-cola. A livello esecutivo, attraverso la totale parzialità degli organismi governativi, come provato dall'azione del Ministero del Lavoro nel processo di smantellamento del sindacato Sinaltrainal, avvenuto per mezzo di licenziamenti di massa dei lavoratori e della loro sostituzione con lavoratori precari nell'azienda della Nestlé a Valledupar.

Tali fatti dimostrano un abbandono da parte dello Stato colombiano delle responsabilità, di stretta competenza di tutti gli Stati, nella difesa dei propri interessi e di quelli dei suoi cittadini; una rinuncia ad agire non solamente come Stato sociale di diritto ma persino come Stato, ciò che implica anche un inadempimento flagrante delle norme costituzionali, come quelle contenute nell'articolo 53, che la Costituzione politica del 1991 riconosce, e come quelle contenute nelle numerose convenzioni internazionali sancite nell'ambito dell'OIL e ratificate dalla Colombia, ovvero le convenzioni n. 87 e n. 98.

Nonostante le ripetute denunce di questi fatti, gli stretti legami tra le imprese transnazionali e gruppi armati paramilitari non sono sempre evidenti. Tuttavia, una prova di questo vincolo è l'indiscutibile coincidenza tra la distribuzione delle risorse naturali della Colombia, gli stabilimenti delle grandi imprese multinazionali e le aree controllate dai gruppi paramilitari. In alcuni casi, le prove del legame tra paramilitari e imprese sono irrefutabili, come succede per la Chiquita Brands. È stato dimostrato che questa impresa ha finanziato cospicuamente gruppi paramilitari e che nel 2001 ha trasportato 3.000 fucili AK 47 e 5 milioni di proiettili destinati ai gruppi paramilitari di Córdoba e Urabá, autori di centinaia di crimini orrendi in questa zona. Il traffico di armi e il finanziamento dei gruppi armati paramilitari, segnalati negli Stati Uniti come gruppi terroristi, sono stati riconosciuti dalla stessa impresa, che è stata condannata da una corte statunitense al pagamento di una sanzione pecuniaria. Le imprese Anglo American, Bhp Billiton e Glencore A.G. hanno

riconosciuto formalmente di aver scelto direttamente il comandante del battaglione incaricato della sicurezza nella miniera del Cerrejón. Nel caso di Multifruits S.A. e Cia Ltda il legame con il paramilitarismo si esprime in termini di parentela: la persona con cui si identifica uno dei blocchi paramilitari è, infatti, il fratello di uno dei soci dell'impresa. Nel caso dell'Unión Fenosa alcuni testimoni hanno sostenuto concordemente che il legame con il paramilitarismo è tale da permettere la nomina di alcuni suoi membri a ruoli centrali dell'amministrazione delle aziende filiali Electrocosta, Energía Social e Electricaribe, per conoscere il personale e i dirigenti sindacali. Questa relazione è stata confermata dalla confessione di uno dei capi delle AUC contenuta in una lettera inviata al Procuratore Generale della Nazione. Il documento descrive l'accordo tra Unión Fenosa e il Blocco Nord delle AUC, secondo cui la mutua collaborazione tra paramilitari e imprese avviene con due modalità differenti. In primo luogo, l'impresa si impegna a garantire un servizio elettrico più efficiente in quelle aree rurali e quartieri emarginati di influenza e controllo dei paramilitari che, a loro volta, si impegnano a garantire una maggiore sicurezza alle installazioni elettriche e a "fare pressione" sugli utenti per facilitare la riscossione dei tributi. In secondo luogo, i capi delle AUC pretendono dai funzionari della Unión Fenosa il libero accesso di alcune persone di loro fiducia ai posti chiave dell'amministrazione delle aziende Electrocosta, Energía Social e Electricaribe, per conoscere i lavoratori e soprattutto i dirigenti sindacali. In cambio di ciò, si impegnano a garantire piena sicurezza ai membri dell'Unión Fenosa in Colombia e al loro patrimonio economico.

In molti altri casi la coincidenza o la quasi corrispondenza tra le necessità delle imprese e le azioni dei gruppi paramilitari fanno pensare almeno ad una collaborazione informale. Lo dimostrano le minacce dei paramilitari che seguono alle convocazioni di uno sciopero; le segnalazioni da parte dei dirigenti delle imprese di alcuni lavoratori accusati di collaborare con la guerriglia; nel caso della Nestlé a Valledupar, l'accusa rivolta ai lavoratori di essere i responsabili, per le frequenti rivendicazioni sindacali, dell'abbassamento del prezzo di vendita del latte; l'alto numero di sparizioni e di omicidi di sindacalisti (quasi 100 da gennaio 2005). È significativa l'assenza, anche solo da parte delle imprese esaminate, di condanne morali contro questi crimini e il mancato esercizio di qualsiasi tipo di pressione, nonostante il rapporto diretto con le autorità governative competenti, per esigere l'accertamento delle responsabilità di suddetti crimini. È indiscutibile che queste imprese abbiano utilizzato metodi, nei loro rapporti con i lavoratori, che incitano alla violenza e, soprattutto, è evidente che le strategie antisindacali messe in atto abbiano beneficiato del clima di terrore e violenza generato dai gruppi paramilitari.

4.2.2 Diritto alla salute

La mancanza di responsabilità di alcune imprese è stata sollevata inizialmente per le conseguenze che le loro attività hanno sulla salute delle persone. Sono stati denunciati gli effetti nocivi generati dall'inquinamento delle acque e del suolo causati dai processi produttivi delle imprese petrolifere e minerarie.

Sono stati denunciati, inoltre, numerosi casi di morte e malattie per effetto delle pratiche di fumigazione indiscriminata con glifosato realizzate dall'impresa Dyncorp, con prodotti chimici fabbricati dall'impresa Monsanto che inquinano terreni, acque, e coltivazioni.

Inoltre, si sono presentati casi che sono stati portati dinanzi alle autorità competenti, che hanno dimostrato l'esistenza di pratiche che mettono in grave pericolo la salute della popolazione infantile, come è il caso del rietichettamento e riconfezionamento del latte scaduto prodotto dalla Nestlé.

Per quanto riguarda la medicina tradizionale, propria della saggezza dei popoli originari, diventa sempre più difficile riuscire a trovare le piante da questi utilizzate, a causa della massiccia deforestazione e delle fumigazioni che rappresentano un pericolo per la loro cultura.

La militarizzazione e il conflitto armato facilitano la distruzione dei centri sanitari di base, che insieme alle restrizioni alla libera circolazione, rendono ancora più difficile l'accesso all'assistenza medica.

Infine, la violazione al diritto all'alimentazione contribuisce in modo significativo alla violazione del diritto alla salute.

4.2.3 Diritto all'alimentazione

La povertà diffusa in Colombia incide in maniera diretta sull'accesso agli alimenti di gran parte della popolazione colombiana che presenta alti tassi di denutrizione e fame. Milioni di persone non dispongono di sufficienti fonti di energia, proteine, e micronutrienti per soddisfare le proprie necessità di base per la salute e il benessere fisico. Secondo la FAO e il PAM, 6 milioni di colombiani, ovvero il 13% della popolazione totale, soffrono una fame severa e non hanno le risorse necessarie per comprare alimenti, mentre altri cinque milioni di persone presentano un elevato indice di denutrizione. Sono soprattutto i bambini ad essere i più vulnerabili. Sono infatti 2,5 milioni i bambini che presentano un livello di nutrizione insufficiente. Fino alla metà degli anni Novanta, il 14,7% dei denutriti in America Latina (corrispondente a 147 persone ogni mille abitanti) viveva in Colombia e alla fine del decennio la percentuale ha raggiunto il 17,3% (ovvero 173 persone ogni mille abitanti). Paradossalmente questi dati coincidono con un periodo di grandi progetti di espansione delle coltivazioni per la produzione di biocombustibili che hanno portato la Colombia ai vertici della produzione mondiale.

Un ultimo aspetto da sottolineare è la perdita della sovranità alimentare delle popolazioni autoctone. Se in passato le comunità riuscivano a vivere con quanto la coltivazione della terra gli offriva, oggi sono costretti ad acquistare alimenti prodotti da terzi. Le coltivazioni e gli alimenti tradizionali sono soppiantati da altre forme nuove di consumo, come gli alimenti transgenici, determinando gravi conseguenze sulla cultura di queste popolazioni.

4.2.4 Diritto a una vita degna

Lo Stato colombiano ha rinunciato alla sua responsabilità nella erogazione dei servizi pubblici essenziali e, cosa non meno importante, al controllo di queste prestazioni eseguite da imprese che gestiscono il servizio.

La perdita della casa che segue agli sfollamenti forzati di massa è difficilmente riparabile se si considera che la maggior parte degli sfollati non dispone di sufficienti condizioni economiche per ricostruire le precedenti condizioni di vita nei nuovi luoghi in cui si trovano ad abitare.

Nonostante il Chocó possieda una delle maggiori riserve di acqua al mondo, il 92% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile e si trova a dipendere dall'acqua piovana. Sempre a questi estremi, il problema è generalizzato, soprattutto tra le comunità indigene.

Per quanto riguarda il servizio elettrico, nella zona gestita dall'Unión Fenosa le sospensioni del servizio sono costanti, senza nessuna possibilità di risarcimento. L'Unión Fenosa sistematicamente sospende e impone restrizioni al servizio ad interi gruppi della popolazione utente, anche se in regola con i pagamenti; inoltre se ritiene che la percentuale dei pagamenti per fasce di utenti è bassa, l'impresa procede al ritiro del trasformatore, interrompendo la fornitura del servizio in modo permanente. Dall'altro lato, l'ingresso della Unión Fenosa in Colombia ha coinciso, nella costa settentrionale, con un considerevole aumento dell'indice di mortalità per elettrocuzione, le cui vittime sono soprattutto lavoratori e utenti. L'elevato indice di incidenti sul lavoro si spiega con la politica in materia di diritto del lavoro delle imprese come Electricaribe e Electrocosta, le quali preferiscono affidare lavori tecnici a subcontraenti, ovvero a mano d'opera non qualificata e sottopagata.

4.3 Diritto all'ambiente

Il diritto all'ambiente è riconosciuto dalla Costituzione Politica della Colombia (Articolo 79). Ciò nonostante il Governo ha adottato una serie di leggi che favoriscono lo sfruttamento delle risorse per ottenere un'alta redditività in tempi brevi senza considerare i costi ambientali. Si possono menzionare in questa sede la legge forestale, il codice minerario, elaborato direttamente dagli avvocati delle imprese transnazionali del cemento Holsing, Cemex e Ladrillera Santa Fe, e la legge 11/52 del 2007 dello statuto rurale. Con la stessa logica è in corso di formulazione il progetto di legge che consolida e amplia le concessioni e il processo di privatizzazione delle risorse idriche.

Sono numerose le denunce di inquinamento del suolo e delle falde acquifere, profonde e superficiali, causato soprattutto dallo scarico dei residui derivati dallo sfruttamento petrolifero e minerario e dalle fumigazioni massicce realizzate con prodotti altamente tossici. Esempi di questo sono la distruzione della Laguna de Lipa in Arauca o il degrado del fiume San Juan nel Chocó.

Sono state denunciate, inoltre, a carico della Nestlé, pratiche reiterate di inquinamento delle acque come, ad esempio, gli scarichi nel fiume Bugalagrande di idrocarburi e prodotti chimici (residui di soda e acido

fosforico), materie fecali e residui di caffè, per mezzo dell'impianto di scarico di acque residuali Petar. La stessa situazione si verifica nel fiume Guatapurí a Valledupar. Questi affluenti sfociano rispettivamente nei fiumi Cauca e Magdalena che rappresentano due delle più importanti riserve idriche del Paese, ma nello stesso tempo, presentano gravi e ben documentati problemi di inquinamento, che minacciano seriamente l'ecosistema e le risorse naturali e ittologiche. Allo stesso modo sono stati registrati scarichi di rifiuti di malto derivato dal rinterro di materiale sanitario scaduto nel Municipio di San Pedro, senza previa richiesta del permesso alla Corporación Autónoma Regional di Valle del Cauca (CVC), con gravi conseguenze a livello ambientale. L'impresa sta mantenendo una politica di estrazione irregolare delle acque sotterranee a Bugalagrande in pozzi locali non autorizzati, lasciandone altri 2 fuori servizio, uno per inquinamento da idrocarburi e l'altro per estinzione del liquido. La Nestlé utilizza in modo irrazionale le acque sotterranee per le sue attività, abbandona il pozzo naturale quando questo raggiunge il punto minimo di irrigazione; estrae un totale di 10.000 metri cubici di acqua sotterranea da ogni pozzo a settimana, per un totale di 160.000 metri cubici al mese, con un costo approssimato di 2.061.42.400 pesos colombiani che corrispondono ogni anno a 2.473.708.800 milioni di pesos al cambio di oggi, ciò che corrisponde ad una diretta sottrazione di risorse all'amministrazione comunale.

Anche la pesca è seriamente danneggiata dall'inquinamento delle acque, rendendo difficile la sopravvivenza delle forme di vita tradizionali, per esempio, nel caso del popolazione di Taganga.

La politica di espansione intensiva della palma africana come monocoltura industriale comporta deforestazione, distruzione delle foreste tropicali ed estinzione di centinaia di specie. Si sta barattando la biodiversità naturale con un ecosistema artificiale non differenziato. L'espansione dell'area petrolifera e della fumigazione delle riserve ecologiche e dei parchi nazionali naturali sta portando alle stesse conseguenze.

4.4 Diritti collettivi dei popoli indigeni

Come dimostrato dalle denunce delle vittime, dalle prove e dai rapporti che gli esperti hanno presentato al Tribunale, in Colombia è in atto un processo di sterminio delle popolazioni indigene non solo fisico, ma anche culturale, spirituale, ambientale, sociale, politico ed economico. Le politiche dello Stato direttamente o indirettamente, servendosi delle imprese transnazionali, hanno instaurato un regime di espropriazione territoriale, di violazione dei diritti collettivi e individuali dei popoli, non riconoscendo le loro forme di governo, la loro autonomia e autorità e distruggendo l'equilibrio e l'armonia che secondo le leggi originarie esiste tra l'uomo e la natura.

Le aggressioni fisiche e psicologiche contro i popoli indigeni violano questo equilibrio, non riconoscono le leggi originarie, profanano i luoghi sacri, impediscono di portare a termine i mandati trasmessi dai loro padri spirituali; inoltre, lo spargimento di sangue contamina i loro territori creando uno squilibrio spirituale e ambientale. Secondo quanto dichiarato dalle autorità indigene in riferimento alle loro leggi naturali, il rilascio di concessioni, licenze,

i permessi di esplorazione o sfruttamento delle risorse naturali del suolo, del sottosuolo, degli animali, delle piante, dei pesci, delle miniere, delle acque, dell'aria, delle pietre, delle conchiglie, dei mari, tutti elementi dotati di un'anima, causano uno squilibrio e generano conseguenze gravi e irreversibili a livello culturale, spirituale, e ambientale.

L'insieme delle udienze ha dimostrato una serie di violazioni gravi dei diritti collettivi dei popoli indigeni, che riguarda tutti gli aspetti della loro vita.

4.4.1. Diritto alla proprietà collettiva della terra

Nonostante la corona spagnola abbia stabilito attraverso i suoi atti che tutti i popoli indigeni della Colombia possiedono per il dato di fatto della loro occupazione storica il titolo sufficiente sulle terre da loro occupate, il 27% della popolazione indigena non ha ancora un riconoscimento formale del proprio diritto territoriale. A questo proposito si segnala:

- Il non riconoscimento di alcuni popoli indigeni in quanto tali, come ad esempio il popolo Mocaná, nel regione dell'Atlantico.
- Il mancato riconoscimento degli atti emessi dalla corona spagnola sulla proprietà ancestrale delle terre.
- Il rinvio a tempo indeterminato delle procedure di riconoscimento dei titoli di proprietà, fatto aggravato dalla decisione del Governo di non autorizzare nuovi titoli. Attualmente l'Unità Nazionale delle Terre del Ministero degli Interni ha più di 400 richieste di riconoscimento a cui non è stata data risposta. I popoli maggiormente colpiti da questa situazione sono i Nasa, Pastos, Quillasingas, Zenúes, Yanaconas, Wiwas, Kankuamos, Koguis, e Arhuacos.

Le forme di organizzazione comunitaria delle popolazioni indigene derivano dalla natura collettiva dei loro diritti. Nel Caso Awas Tigni, la Corte Interamericana ha riconosciuto la natura collettiva del diritto di proprietà dei popoli indigeni sulle loro terre, sulla base dei loro usi e costumi e della proprietà ancestrale. Inoltre, la Corte ha stabilito che l'occupazione storica delle terre dovrebbe essere sufficiente affinché le comunità indigene prive di un titolo formale ottengano il riconoscimento giuridico della proprietà e la conseguente registrazione [CIDH, Caso de la Comunità Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua 31/08/2001 párr. 150].

Sul caso della Comunità Sawhoyamaya, la Corte ha concluso, in relazione alla proprietà delle terre dei popoli indigeni, che: 1) la proprietà ancestrale dei popoli indigeni sulle loro terre equivale al titolo di proprietà concesso dallo Stato; 2) la proprietà ancestrale conferisce ai popoli indigeni il diritto di esigere il riconoscimento formale della proprietà e la sua registrazione; 3) i membri dei popoli indigeni che per ragioni estranee alla propria volontà abbiano lasciato o perso il controllo sulle proprie terre tradizionali mantengono il diritto di proprietà sulle stesse, anche se prive di un titolo legale, eccetto nei casi in cui le terre siano state legittimamente e concordemente cedute a terzi; 4) i membri delle popolazioni indigene che hanno involontariamente perso la proprietà delle loro terre, concesse legittimamente a terzi estranei ai fatti,

hanno il diritto di recuperarle o di ottenere altre terre di uguale estensione e qualità. Ne consegue che il titolo di proprietà non è un requisito indispensabile che possa limitare il diritto a recuperare le terre [CIDH, Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay, 29/03/2006, párr. 128].

Per concludere, qualsiasi procedimento amministrativo creato ai fini di concedere i titoli di proprietà collettiva ai popoli indigeni deve essere efficace, rapido e di semplice accesso. Stando a quanto affermato dalla Corte Interamericana, “in conformità con l’art. 2 della Convenzione Americana, gli Stati dovranno istituire procedimenti adeguati nel quadro del sistema giuridico nazionale per rispondere alle rivendicazioni delle terre dei popoli indigeni interessati. Per questo l’obbligo generale di garanzia stabilito nell’art. 1.1 di detto trattato impone agli Stati il dovere di assicurare che l’espletazione di tali procedimenti sia accessibile e semplice e che gli organi incaricati godano delle condizioni tecniche e degli strumenti necessari per fornire una risposta adeguata alle richieste presentate nel quadro di questi procedimenti” [CIDH, Caso della Comunità Yake Axa vs. Paraguay, 17/06/2005, párr. 102].

Nella cosmovisione indigena la terra rappresenta l’universo, e comprende quello che si trova al di sopra e al di sotto il suolo, come le risorse naturali rinnovabili (fonti di acqua, legno, flora e fauna) e quelle non rinnovabili (miniere, gas, e petrolio). Il territorio è collegato a tutto ciò che è sacro, allo spazio della riproduzione sociale, della sopravvivenza fisica, del lavoro, della solidarietà, e in generale all’esercizio della propria autonomia. La Corte Interamericana ha evidenziato, nel Caso de la masacre de Plan de Sánchez, che per i membri delle comunità indigene l’armonia con l’ambiente circostante si esprime attraverso la relazione spirituale che hanno con la terra, la modalità di gestione delle risorse e il profondo rispetto per la natura [Caso de la Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, 19/11/2004, párr. 85].

Ciò nonostante, il Governo della Colombia, gli altri attori armati e quelli economici nazionali e internazionali mettono in atto, con diverse modalità, strategie aventi l’obiettivo di allontanare i popoli indigeni dalle aree di interesse economico per facilitare lo sfruttamento delle risorse da parte delle imprese transnazionali. Tra queste strategie emergono:

- L’adozione di leggi nazionali incompatibili con la Costituzione colombiana, come la Legge Forestale, il codice minerario o lo statuto rurale, che non riconoscono i diritti dei popoli indigeni, riconosciuti nei trattati internazionali sottoscritti dalla Colombia.
- L’uso generalizzato della violenza, delle minacce e del terrore contro i civili da parte dei gruppi armati, spesso al servizio delle imprese transnazionali, sia per liberare il territorio prima di avviare le attività economiche, sia per reprimere le manifestazioni di protesta contro di esse.
- La militarizzazione del territorio, associata all’implementazione dei grandi progetti di sfruttamento, soprattutto minerario, petrolifero, agroindustriale che inoltre necessitano di progetti di infrastrutture tra loro collegate. La presenza militare limita l’accesso alla terra e la fornitura di beni e servizi. Questi fatti si verificano soprattutto nelle

regioni della Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira, Putumayo, Catatumbo, e Arauca.

- L'occupazione di grandi estensioni di territorio per l'introduzione su vasta scala della palma africana per la produzione di agrocombustibili, specialmente nel Meta, nel Chocó, e nella zona di Nariño.
- La distruzione di forme di vita tradizionali (agricoltura, pesca, caccia), a causa dello sfruttamento delle risorse e dell'inquinamento di cui si è parlato sopra. Per esempio, l'attività della pesca di Taganga o le forme di vita del popolo Sikuani sono state estremamente colpite.

4.4.2. Diritto alla proprietà collettiva sulle risorse naturali

Il Tribunale ha accertato:

- La realizzazione di un vero e proprio saccheggio delle risorse naturali, quali gas, carbone, minerali, petrolio, legno e biodiversità, avvenuto senza la minima considerazione dell'impatto e delle conseguenze sull'ambiente, con l'obiettivo di ottenere maggiori benefici nel minor tempo possibile.
- Tra il 2000 e il 2006, la distruzione delle coltivazioni, della pesca e del bestiame causata dalla fumigazione indiscriminata che ha colpito gravemente 105 territori indigeni. Le accuse mosse dalla comunità Awa hanno dimostrato che l'aspersione aerea interessa indiscriminatamente le coltivazioni lecite e illecite. Infatti, secondo i dati presenti nella pagina web del Ministero dell'Interno colombiano, tra il 1999 e il 2006 sono stati fumigati 910.049 ettari in Colombia con un componente chimico prodotto dalla multinazionale Monsanto, il glifosato. L'incremento della produzione illecita di coca del 20% nel 2007 dimostra significativamente che la fumigazione non è di fatto diretta alle coltivazioni illecite, il cui controllo è nelle mani dei settori più potenti del Paese.
- La contaminazione delle acque e dei suoli, la distruzione della flora e della fauna come conseguenza dello sfruttamento delle risorse e delle fumigazioni.
- Il saccheggio dei saperi ancestrali legati alla biodiversità e del materiale genetico dei popoli indigeni colombiani, a causa del progetto *Genoma Humano*. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Genetica dell'Università Pontificia Javeriana ha realizzato in Colombia mappaggi di DNA tra le popolazioni indigene. I gruppi che hanno effettuato tali rilevamenti, in collaborazione con esperti nordamericani, si sono presentati nelle vesti di una missione medica presso le popolazioni indigene più emarginate della Sierra Nevada de Santa Marta e di diverse regioni del Paese. Con i campioni di sangue raccolto, i ricercatori hanno estratto, stoccato e trasferito in laboratori stranieri il DNA delle popolazioni indigene

indicate. A rilevamenti effettuati, i possessori originali perdono ogni controllo sull'informazione genetica. Con le tecniche oggi disponibili, è possibile clonare geni, fare esperimenti; inoltre, soggetti terzi possono sollecitare brevetti per utilizzare questo materiale con finalità industriale o commerciale. Le modalità con cui si ottengono i campioni nelle comunità indigene violano il principio di dignità umana riconosciuto in diversi patti sui diritti umani. Non sono state osservate le norme riguardanti il previo consenso informato, né sono state mai fornite informazioni sugli studi effettuati sui campioni, sul trasferimento dei campioni in altri Paesi o sull'applicazione di brevetti.

Procedimenti simili di rilevamenti ottenuti con inganni sono stati effettuati da ricercatori che hanno avuto accesso ai territori indigeni. Approfittando dell'amicizia e della fiducia delle comunità, i ricercatori raccolgono piante, animali e informazioni sui loro usi e pratiche senza chiederne l'autorizzazione. Queste informazioni vengono poi pubblicate o inserite in banche dati di pubblico dominio, facendo perdere alle comunità ogni possibilità decisionale sul loro uso. Le piante raccolte possono essere riprodotte e dopo aver effettuato qualche modifica nel loro genoma, per mezzo di tecniche tradizionali di miglioramento genetico o attraverso tecniche di ingegneria genetica, persone terze possono appropriarsene nei termini, e con le implicazioni, di proprietà intellettuale. Le centinaia di anni di selezione, coltivazione e lavoro collettivo associato alle piante diventano, grazie a meccanismi di questo tipo, proprietà di compagnie e di privati che utilizzano la diversità biologica e culturale per lo sfruttamento industriale e commerciale. I casi della *ayahuasca* (*Banisteriopsis* spp), *achiote* (*Bixa orellana*), *uña de gato* (*Uncaria tomentosa*) y del fagiolo *enola* sono gli esempi più evidenti della tendenza generalizzata della bio-pirateria.

Occorre tener presente che il diritto di proprietà delle popolazioni indigene sulle risorse naturali ha natura collettiva. Nel caso del Pueblo Saramaka, in riferimento all'articolo 21 della Convenzione Americana, la Corte Interamericana ha dato enfasi al rispetto di questo diritto applicato alle risorse naturali che si trovano sui territori tradizionalmente occupati, che sono necessari per la sopravvivenza, lo sviluppo e l'esistenza del popolo indigeno stesso [CIDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname, 28/11/2007, párr. 123, 158].

4.4.3. Diritto all'autogoverno e all'autonomia culturale

Nonostante il principio di autonomia politica e amministrativa e il diritto di mantenere la propria cultura siano riconosciuti dalla Costituzione politica colombiana e dal diritto internazionale, persiste in Colombia il disprezzo deliberato delle strutture organizzative interne e delle autorità indigene. A questo proposito, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene approvata nel 2007 riconosce esplicitamente il diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni che comprende il diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni legate agli affari interni e locali,

il diritto a disporre dei mezzi per finanziare il loro funzionamento e il diritto a conservare e consolidare le proprie istituzioni politiche e giuridiche.

È di particolare rilievo il riconoscimento del diritto all'autogoverno fondato sul diritto proprio. Nel Caso del Pueblo Indígena Sarayaku, la Corte Interamericana ha ritenuto necessario prendere in considerazione determinati aspetti dei loro costumi per l'applicazione della Convenzione Americana, soprattutto relativamente alle risorse esistenti nei territori indigeni [CIDH, Caso Pueblo Indígena de Sarayaku vs. Ecuador, Medidas Provisionales, 17/06/2005, considerando 9].

Si evidenziano, inoltre, i seguenti fatti:

- La criminalizzazione sistematica dei processi di resistenza civile delle popolazioni indigene, con segnalazioni collettive e accuse di vario tipo, come quelle di appartenere alla guerriglia, di essere terroristi e delinquenti; a questo si aggiunge il ricorso a ricompense che intensificano le denunce false, fatto che si verifica soprattutto nel caso del popolo Nasa, nel Cauca, anche se non è il solo.
- L'ingresso frequente di attori armati nelle aree indigene protette e in altri territori senza autorizzazione; l'occupazione delle case e degli spazi pubblici, come accade, per esempio, nel caso del popolo Embera-Chamí, nella zona di Caldas.
- La mancanza di rispetto dei luoghi sacri, attraverso irruzioni di attori armati, progetti di sfruttamento delle risorse spesso sostenuti da azioni militari. Per fare alcuni esempi si possono citare: il progetto dell'impresa Muriel nel Monte Careperro, tra il Chocó e Antioquia; il progetto della Occidental Petroleum nel territorio sacro degli U'wa; il progetto dell'impresa Drisa della diga di Besotes, in Sierra Nevada de Santa Marta.
- Si registrano anche casi di umiliazione delle popolazioni indigene con l'imposizione della lingua spagnola e per il mancato riconoscimento dei loro diritti linguistici.

4.4.4. Diritto alla partecipazione nelle questioni che le riguardano

Nonostante tutti i testi normativi di riferimento riconoscano il diritto delle popolazioni indigene a partecipare ai processi decisionali sulle questioni che riguardano i loro diritti, in particolare, il diritto a essere consultati al fine di ottenere il consenso libero, previo ed informato prima di adottare e di applicare misure legislative o amministrative che li danneggino, prima di adottare qualsiasi progetto che comprometta le loro terre o territori ed altre risorse, in particolare in relazione allo sviluppo, uso o sfruttamento delle risorse minerali, idriche e di altro tipo, e prima di utilizzare le loro terre o territori per operazioni militari: il Tribunale ritiene provato un modello diffuso di violazioni di questo diritto di partecipazione.

Il Governo della Colombia è fautore di una politica al servizio degli interessi delle grandi imprese transazionali; trascura di fatto le sue funzioni pubbliche e

permette che le imprese gestiscano “privatamente”, per i loro interessi, la partecipazione delle comunità.

Ne consegue la violazione del diritto delle popolazioni indigene a partecipare, esercitando a loro volta il proprio diritto all'autogoverno, ai processi decisionali sulle questioni che le riguardano; l'inadempimento generalizzato dell'obbligo di consultazione preventiva e la deformazione di questo diritto. La consultazione non avviene quasi mai preventivamente e si riduce ad essere una riunione di facciata convocata dalle imprese promotrici che fanno spesso ricorso all'inganno per convincere i rappresentanti indigeni a firmare accordi già scritti, oppure usano questi espedienti per promuovere la corruzione tra alcuni di essi. A volte viene impedito alle popolazioni di rimanere in alcuni territori, come nel caso dell'impresa Ecopetrol nel territorio del popolo Barí. Inoltre, non sono mai stati definiti accordi effettivi di risarcimento per le risorse già sfruttate o per i danni già causati. I fatti esposti costituiscono, in generale, una distorsione del diritto alla partecipazione e, per queste ragioni, alcuni rappresentanti delle popolazioni indigene si oppongono alla consultazione preventiva, perché la considerano una forma di inganno, corrispondente ad un piano di divisione, compravendita o corruzione del consenso dei leader avente l'obiettivo di disarticolare internamente le comunità.

La violazione del diritto alla consultazione preventiva ha facilitato, in tutto il Paese, l'imposizione di grandi progetti di sfruttamento generalizzato delle risorse con interventi agroindustriali, di sviluppo turistico e di infrastrutture che colpiscono in modo particolarmente grave le popolazioni indigene.

4.4.5. Diritto allo sviluppo

È stato inoltre dimostrato:

- La violazione del diritto a partecipare liberamente all'elaborazione e alla realizzazione di progetti sulla salute, sull'alloggio e su altri programmi economici e sociali che riguardano le popolazioni indigene e del diritto di gestirli con il supporto delle istituzioni comunitarie.
- L'esclusione storica dei popoli indigeni dai servizi fondamentali, nonostante l'esistenza di risorse sufficienti nel paese e nelle terre da loro occupati; in particolare l'accesso all'alimentazione, all'acqua potabile e alla salute, cosa che spiega la presenza di malattie come la tubercolosi, il morbo di Chagas o il vaiolo.
- L'imposizione di modelli di sviluppo basati sullo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle imprese transnazionali che rendono impossibile la realizzazione dei progetti di vita delle popolazioni indigene e che violano l'integrità territoriale, culturale, ambientale, economica e la sovranità stessa.
- L'esclusione delle popolazioni indigene dai benefici economici derivati dallo sfruttamento delle risorse naturali che si trovano nel loro territorio.

Un caso significativo è quello del Progetto di Vita Juan Tama delle comunità Nasa de Inzá che tutela l'identità culturale dei Nasa Wala promuovendo una

produzione alternativa e legale della foglia di coca, e garantendo un'occupazione a più di 2000 famiglie. Le autorità Naza de Inzá hanno emesso la Risoluzione 001 del 29 giugno 2002 con la quale è stato autorizzato e avviato il Progetto Coca Nasa finalizzato alla produzione e commercializzazione dei prodotti leciti derivati dalla foglia di coca con i quali il progetto ha avuto inizio. Il 31 gennaio 2007 l'Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), rappresentato dalla Vicedirettrice del Progetto Medicinali e Prodotti Biologici e il Vicedirettore di Alimenti e Bevande Alcoliche, ha emesso un'ordinanza che vieta la commercializzazione di prodotti derivanti dalla foglia di coca come té, gallette, dolci e la bevanda Coca Sek al di fuori dalle aree indigene protette. Con questa ordinanza l'INVIMA ha messo in pericolo l'esistenza e l'autonomia del popolo indigeno proibendo il progetto che era stato adottato dall'Assemblea indigena o Nasa Wala sulla base degli articoli 286, 287 e 330 della Costituzione politica e degli obblighi internazionali che proteggono le forme proprie di governo delle popolazioni indigene. Questa ordinanza dell'INVIMA è un precedente che, dichiarando illegali attività produttive alternative, condanna le popolazioni indigene a vivere in condizioni di esclusione economica, sociale e culturale.

4.4.6. Diritto all'esistenza come popoli

Sulla base di quanto esposto il Tribunale ha ricostruito un quadro di assoluta negazione dell'identità delle popolazioni indigene che si traduce nella violazione di un insieme di diritti riconducibili al diritto all'esistenza con le proprie forme di vita, i propri costumi e tradizioni e la propria cosmovisione.

Il Tribunale ha, inoltre, constatato il pericolo imminente di estinzione fisica e culturale di 28 popolazioni indigene, ciascuna delle quali è costituita da un numero inferiore alle cento persone che si dibattono tra la vita e la morte. La loro estinzione costituirebbe, oggi, in pieno secolo XXI, non solo una vergogna per lo Stato colombiano e per l'intera umanità, un genocidio e un crimine contro l'umanità per inadempimento degli organismi istituzionali dell'obbligo di impedire che il rischio di estinzione diventi irreversibile per tutte queste popolazioni: Nukak, Shiripu, Wipibi, Amorúa, Guayabero, Taiwano, Macaguaje, Pisamira, Muinane, Judpa, Yauna, Bara, Ocaina, Dujos, Piaroa, Carabayo, Nonuya, Matapí, Cagua, Kawiyarí, Tutuyo, Tariano, Yagua, Carapaná, Chiricoa, Achagua, Carijona e Masiguare.

4.5 Quadro generale sull'Impunità

L'insieme delle prove presentate al Tribunale nel corso delle udienze hanno dimostrato l'esistenza di una situazione di impunità generalizzata, che in Colombia ha carattere strutturale, a causa dell'inadempimento sistematico dello Stato dei suoi obblighi di indagare, punire e riparare le violazioni dei diritti umani.

Si può infatti affermare che l'impunità è diventata la regola, poichè lo Stato ha occultato violazioni persistenti dei diritti umani e crimini contro l'umanità - per

loro natura imprescrittibili -, al punto da obbligare le vittime a presentare le accuse dinanzi a questo Tribunale.

A questo proposito, si può fare riferimento alla dottrina formulata dal Tribunale Permanente dei Popoli in occasione della Sessione su “L’impunità per i crimini di lesa umanità in America latina”, celebrata a Bogotà dal 22 al 25 aprile 1991. Già allora il Tribunale ha constatato l’esistenza di “una vera e propria situazione di criminalità (...) esercitata dallo stesso Stato e da gruppi para-ufficiali”, che ha come risultato “la distruzione del tessuto sociale”, a causa della violenza esercitata su “gruppi sociali ben definiti: *campesinos*, operai e popolazione urbana”, e ha stabilito che “la popolazione indigena è oggetto specifico di massacri che sfiorano il genocidio” (Sessione su “L’impunità per i crimini di lesa umanità in America Latina”, par. 62).

Il Tribunale definiva così in modo preciso le caratteristiche del fenomeno dell’impunità e ne anticipava lucidamente le conseguenze politiche e sociali che trovano purtroppo oggi pieno riscontro.

Si verificava infatti allora “il consolidamento di una vera e propria *cultura della violenza*. La violenza appare scontata e la morte per motivi politici perde la sua vera dimensione, specialmente per i mezzi di comunicazione di massa che ne parlano come una componente tra le tante della cronaca quotidiana. La paura nel denunciare i crimini e le responsabilità si traduce nel silenzio delle persone coinvolte. In questo modo la distruzione del tessuto sociale sfocia nella disintegrazione culturale” (Par. 64).

Sulla base delle analisi e riflessioni raccolte, il Tribunale concludeva con il severo avvertimento che “l’impunità istituzionalizzata può mettere in pericolo i diritti e gli spazi politici conquistati dalla società civile. Più aumenta il discredito nei confronti dei governi democratici che non vogliono affrontare il problema dell’impunità, più il processo di democratizzazione ristagna, in quanto si pregiudica lo stesso ideale della democrazia e dello sviluppo sociale, se non di tutto il sistema politico, della politica in generale. Si stabiliscono, di conseguenza, condizioni favorevoli al sorgere e allo svilupparsi di false alternative di carattere populista, caudillista e in generale di nuovi autoritarismi” (Par. 66).

L’impunità coincide con la negazione della violazione dei diritti delle vittime, riconosciuti: nella Dichiarazione sui Principi Fondamentali di Giustizia in favore delle Vittime di Delitti e dell’Abuso di Potere, adottata dalla Risoluzione 40/34 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985; nella Risoluzione della Commissione dei Diritti Umani 2004/34 sul Diritto alla Restituzione, Risarcimento e Riabilitazione delle vittime di Violazioni gravi dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali; nei Principi e Direttive Base delle Nazioni Unite sul Diritto delle Vittime delle violazioni delle norme internazionali dei Diritti Umani e del Diritto Internazionale Umanitario di presentare ricorsi e ottenere riparazioni, approvato dalla Commissione dei Diritti Umani il 19 aprile 2005.

La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha definito l’impunità come “l’insieme delle omissioni di indagini, persecuzione penale, cattura, processo e condanna dei responsabili delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione Americana”; ha segnalato inoltre che “lo Stato ha l’obbligo di opporsi a questo fenomeno con ogni strumento legale disponibile e che l’impunità favorisce la

ripetizione cronica delle violazioni dei diritti umani e la totale vulnerabilità delle vittime e dei loro familiari (CIDH, Sentencia Paniagua Morales y otros, pár. 173, y sentencia de reparaciones Loaiza Tamayo, párr. 168 y 170). Il conosciuto caso di Barrios Altos ha stabilito che “l’impunità dei crimini costituisce di per sé una violazione dei diritti umani (...) non é lecito che uno Stato rinunci all’obbligo di indagare, giudicare, e sanzionare per mezzo di concessioni di amnistie o di altre misure che garantiscono l’impunità”; e che “(...) sono inammissibili le disposizioni in materia di amnistia e prescrizione che permettono l’esclusione di responsabilità e che ostacolano le indagini e la sanzione dei responsabili delle violazioni gravi dei diritti umani quali la tortura, le esecuzioni sommarie, extragiudiziarie o arbitrarie e le sparizioni forzate, contravvenenti ai diritti inderogabili riconosciuti dal Diritto Internazionale dei Diritti Umani”.

Nel caso specifico della Colombia, la Corte Interamericana dei Diritti Umani si é pronunciata nei casi conosciuti come “19 commercianti” (5 luglio 2004), “Gutiérrez Soler” (12 settembre 2005), “Masacre de Mapiripán” (15 settembre 2005), “Masacre de Pueblo Bello” (31 gennaio 2006), “Masacre de Ituango” (1 luglio 2006) e “Masacre de La Rochela” (11 maggio 2007).

Per quanto riguarda il Caso del Massacro de La Rochela vs. Colombia, la Corte ha stabilito la responsabilità internazionale della Colombia “per aver prodotto un quadro di legalità attraverso il quale si è favorita la creazione di gruppi di autodifesa che hanno dato origine ai paramilitari e per la mancata adozione di tutti i mezzi necessari per scongiurare definitivamente la situazione di rischio creata dallo stesso Stato attraverso tali norme”, come anche per “l’inadempimento del suo dovere di garanzia per non aver adottato misure valide di prevenzione e protezione della popolazione civile che si trovava in una situazione di rischio ragionevolmente prevedibile da parte dei membri delle Forze Armate o di sicurezza dello Stato rispetto ai gruppi paramilitari (par. 78)”.

E nel caso “19 comerciantes” ha concluso che lo Stato colombiano ha violato il diritto alla verità. In tal senso, ha stabilito che le vittime delle gravi violazioni dei diritti umani e i loro familiari hanno il diritto di conoscere la verità. Per questo motivo, i familiari delle vittime devono essere informati su quanto accaduto in relazione alle violazioni commesse (pár. 261).

Grazie ai documenti forniti e alle testimonianze raccolte nel corso delle udienze, si può concludere che la situazione evocata di impunità, riconosciuta nei documenti internazionali citati, non solo si è mantenuta intatta, ma si è aggravata in modo esponenziale, se si considerano gli avvenimenti politici, l’accumulazione del potere incontrollato in mano allo Stato e il monopolio dell’informazione. Infatti, nei casi in cui sono aperte delle indagini, si tende a non superare la fase preliminare, e in rari casi si raggiunge una sentenza definitiva, in un contesto di assoluta paura da parte dei testimoni e di inefficacia o di una vera e propria complicità delle autorità responsabili delle indagini.

Pertanto, il Tribunale Permanente dei Popoli accoglie le richieste delle vittime e il grido di indignazione di un testimone, il quale ha affermato: “Che non resti impunito...che non resti mai più impunito un crimine di lesa l’umanità”.

5. DISPOSITIVO

Il Tribunale Permanente dei Popoli, dopo un lungo processo di indagine iniziato a Berna alla fine del 2005 e sviluppato attraverso varie udienze tematiche realizzate in Colombia,

Avendo ascoltato in udienza pubblica le organizzazioni sociali e sindacali, le organizzazioni non governative, le popolazioni indigene e le vittime,

Avendo analizzato le denunce, le testimonianze e le petizioni, così come il materiale di difesa presentato,

Avendo considerato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, i trattati e le dichiarazioni internazionali pertinenti, i principi e le norme generali del diritto internazionale pubblico,

In conformità con il mandato del proprio Statuto, e per disposizione e autorizzazione delle persone, organizzazioni, comunità e popoli partecipanti a questa sessione:

5.1. Considera anzitutto imprescindibile denunciare moralmente ed eticamente a livello mondiale:

- La condotta e le pratiche politiche, economiche, finanziarie, produttive e giudiziarie del modello liberale, messe in atto dagli Stati e dalle istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con il pretesto di promuovere la crescita e lo sviluppo economico per combattere la povertà ed affermare lo sviluppo sostenibile, sono causa dell'aumento delle disuguaglianze tra una minoranza di ricchi e una straordinaria maggioranza costretta a scontare le conseguenze negative della globalizzazione; inoltre, incoraggiano e autorizzano per le imprese transnazionali una invisibilità giuridica che rende difficile una imputabilità formale dal punto di vista del diritto internazionale.
- Le imprese transnazionali per le gravi, evidenti e persistenti violazioni dei principi e norme generali, dei trattati internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali delle comunità, nazionalità, popoli, famiglie e persone dell'America Latina.

5.2. Considera in questa sede le responsabilità delle imprese transnazionali sui diritti umani in Colombia.

Ben diciassette anni fa il Tribunale permanente dei Popoli ha descritto così la realtà Colombiana:

Colombia: Governo formalmente democratico che vive in una inusitata e persistente realtà di crimini di lesa umanità. La violenza istituzionale (Forze armate e organismi di sicurezza dello Stato), para-istituzionali (organismi paramilitari) e extra istituzionali (sicari e assassini professionisti pagati), sotto l'egida della Dottrina della Sicurezza Nazionale e della teoria del Conflitto di Bassa Intensità continua sistematicamente a eliminare tutte le persone o

organizzazioni sociali, sindacali o politiche che pretendano di non accettare le attuali ingiustizie strutturali, socioeconomiche e politiche. L'assassinio dei leaders popolari e politici dell'opposizione, la sparizione forzata, i massacri di campesinos, i bombardamenti di zone rurali, la detenzione illegale sono altrettanti strumenti usati nella sistematica e permanente violazione dei diritti più elementari.

I meccanismi dell'impunità si manifestano nella "copertura" dei responsabili dei delitti da parte delle autorità; nella legittimazione dei gruppi di autodifesa; nell'assenza dei registri delle persone catturate e incarcerate in centri militari; nel rifiuto delle autorità di ricevere denunce relative a fatti riguardanti Crimini di Lesa Umanità; nelle minacce a testimoni o a coloro che fanno denunce; nel non riconoscimento come entità giudiziarie specifiche di delitti come l'omicidio collettivo e la sparizione forzata; nell'estensione del Foro Militare anche a delitti comuni commessi nell'ambito di attività di servizio da parte delle Forze armate e della Polizia nazionale; in pratiche legislative di quasi-indulto, indulto improprio e amnistia camuffata a favore dei paramilitari. A tutto questo si aggiunga l'assenza di volontà politica da parte dello Stato che in modo attivo, e per omissione cosciente permette ed è il principale protagonista dei crimini di lesa umanità (Sessione "L'impunità dei Crimini di lesa umanità in America Latina", Bogotà, 1991).

I dati e i fatti presentati in questa Sessione sono in stretta continuità con l'analisi riportata. Va aggiunto che tale diagnosi conferma l'esistenza di pratiche di violazione dei diritti fondamentali della popolazione negli apparati istituzionali, che favorisce a sua volta la creazione di meccanismi di impunità. La Colombia sembra presentarsi, in questo senso, come un vero laboratorio politico istituzionale in cui gli interessi degli attori economici nazionali ed internazionali sono pienamente tutelati dall'abbandono da parte dello Stato delle sue funzioni e del suo dovere costituzionale di difesa della dignità e della vita di gran parte della popolazione, alla quale si applica, come se si trattasse di un nemico, la dottrina di sicurezza nazionale, nella sua versione colombiana.

5.3 Considerati i fatti provati, il Tribunale condanna:

5.3.1 Il Governo della Colombia

- Per aver istituito un sistema legislativo che favorisce la violazione del diritto al lavoro, riconosciuto nella Costituzione politica della Colombia del 1991 e la violazione di diritti lavorativi in varie convenzioni internazionali adottate dall'OIL, come la n. 87 e la n. 98.
- Per aver istituito un sistema giuridico e istituzionale che favorisce la violazione generalizzata dei diritti civili e politici e dei diritti economici, sociali e culturali sanciti nelle convenzioni internazionali, tra le quali i Patti Internazionali sui Diritti Umani del 1966.
- Per non aver adempiuto al suo dovere di proteggere l'ambiente come stabilito dalla Costituzione politica della Colombia del 1991.

- Per non aver rispettato i diritti collettivi alla terra, alle risorse naturali, all'autogoverno e i diritti alla partecipazione e allo sviluppo delle popolazioni originarie.
- Per la sua partecipazione diretta e indiretta, per azione o omissione, nella commissione di pratiche genocide, nelle modalità di: uccisione di membri della popolazione colombiana; lesioni gravi all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti alla popolazione colombiana; sottomissione deliberata di membri della popolazione colombiana a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. Queste pratiche si sono esplicitate soprattutto nel processo di estinzione di 28 comunità indigene, nel processo di annichilamento del movimento sindacale colombiano e nello sterminio del gruppo politico Unión Patriótica.
- Per la sua partecipazione diretta e indiretta, per azione o omissione, nella commissione di crimini contro l'umanità, avvenuti per mezzo di: assassinio; sterminio; deportazione o sfollamento forzato di persone; imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; tortura; stupro; persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di identità propria fondata in ragioni di ordine politico ed etnico, in relazione con altri crimini già menzionati e con la sparizione forzata di persone.
- Per la sua partecipazione diretta e indiretta, per azione o omissione, nella commissione di crimini di guerra, evidenti principalmente in quelli elencati nell'articolo 3, comune ai quattro Convegni di Ginevra del 1949, commessi contro persone non partecipanti direttamente alle ostilità: atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare di tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; violazione della dignità personale, in particolare nella pratica di trattamenti inumani e degradanti, ed esecuzioni senza preventivo giudizio svolto davanti a un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.
- Per inadempimento dei suoi obblighi di persecuzione del genocidio, dei crimini di guerra e contro l'umanità, con particolare riferimento alla violazione del diritto di tutela giudiziaria e dei diritti internazionalmente riconosciuti alle vittime dei crimini citati precedentemente.

In quanto a ciò che in questa sede viene definita "partecipazione indiretta", occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani afferma: "È un principio fondamentale del diritto in merito alla responsabilità internazionale dello Stato, ispirato al Diritto Internazionale dei Diritti Umani, che tale responsabilità possa generarsi per atti o omissioni di qualsiasi potere, organo o agente statale, indipendentemente dal suo grado gerarchico, che violino i diritti consacrati internazionalmente ". Inoltre, la Corte ha considerato che "un fatto illecito che violi i diritti umani ma che inizialmente non risulti imputabile direttamente a uno Stato, per essere, ad esempio, opera di un privato o per non aver individuato l'autore del reato, può comunque

determinare la responsabilità internazionale dello Stato, non per il fatto in sé, ma per la mancanza della dovuta solerzia nel prevenire la violazione o per non averla trattata nei termini stabiliti dalla Convenzione". Questo può essere applicato ai crimini commessi dai gruppi paramilitari per propria iniziativa e principalmente quando questi crimini sono stati commessi congiuntamente ad agenti dello Stato.

Senza contraddire né limitare quanto affermato, si ritiene che le persone appartenenti a organi dello Stato e a qualsiasi gruppo paramilitare, qualunque sia la loro posizione in queste strutture, sono responsabili anche individualmente in ambito penale, come autori o complici, dei crimini di genocidio, di guerra o contro l'umanità nei quali abbiano partecipato.

5.3.2 Nella misura delle loro rispettive responsabilità, si condannano le seguenti imprese madri e le loro filiali colombiane:

Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore-xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Keshada, Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, Pizano S.A. e la sua filiale Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp Multifruit S.A. filiale della multinazionale Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Pertominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold-cobre y Oro de Colombia S.A.

Le imprese multinazionali qui considerate hanno partecipato, secondo diverse modalità, a violazioni di diritti umani di cui a seguire si precisano le imputazioni. In alcuni casi, vi hanno partecipato direttamente e attivamente, in altri vi hanno partecipato come istigatori o complici; in generale, hanno beneficiato economicamente dell'esistenza e delle caratteristiche del conflitto armato in Colombia e delle violazioni dei diritti che nell'ambito di questo conflitto si verificano.

Un dato significativo è che le imprese non si sono dissociate esplicitamente dal sistema di violazioni dei diritti umani esistente in Colombia e non hanno mai espresso nessuna protesta seria alle autorità competenti per le violazioni in cui sono state coinvolte direttamente, come nei casi di assassini di lavoratori avvenuti a volte nelle strutture o negli impianti di loro proprietà.

Le accuse sono le seguenti:

- Violazioni gravi e diffuse dei diritti lavorativi, specificatamente riguardo alle libertà sindacali; disprezzo per la dignità e la vita dei lavoratori e delle loro associazioni, adesione a politiche imprenditoriali che contribuiscono al deterioramento drammatico delle condizioni di vita e di salute di una parte sempre crescente della popolazione colombiana.
- Frode nei confronti dei loro azionisti e dei consumatori dei loro prodotti per aver assunto impegni di responsabilità sociale non rispettati in Colombia.

- Partecipazione al processo di degrado dell'ambiente in Colombia.
- Lesione dei diritti collettivi alla terra, alle risorse naturali, all'autogoverno, dei diritti di partecipazione e del diritto allo sviluppo dei popoli originari.
- Partecipazione come autori, complici o istigatori, nella commissione di pratiche genocide, nelle pratiche di: uccisione di membri della popolazione colombiana; lesioni gravi all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti alla popolazione colombiana; sottomissione deliberata di membri della popolazione colombiana a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. Queste pratiche si sono esplicitate soprattutto nel processo di estinzione di 28 comunità indigene, nel processo di annichilamento del movimento sindacale colombiano e nello sterminio del gruppo politico Union Patriotica.
- Partecipazione come autori, complici o istigatori nella commissione di crimini contro l'umanità, avvenuti per mezzo di: assassinio; sterminio; deportazione o sfollamento forzato di persone; imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; tortura; stupro; persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di identità propria fondata in ragioni di ordine politico ed etnico, in relazione con altri crimini già menzionati e con la sparizione forzata di persone.

Senza contraddire nè limitare quanto affermato, si dichiara inoltre che qualsiasi persona vincolata a queste imprese è responsabile anche individualmente a livello penale come autore o complice dei crimini contro l'umanità nei quali abbia preso parte.

5.3.3 Si condannano gli Stati di origine delle imprese madri delle multinazionali analizzate:

- Per aver permesso e avallato che dette entità giuridiche possano violare nel corso delle attività economiche svolte in Paesi terzi, come in questo caso la Colombia, gli standard internazionali di rispetto dei diritti umani che nei propri Paesi d'origine sarebbero stati obbligati a rispettare.

5.3.4 Inoltre, in particolare, **si condanna il governo degli Stati Uniti d'America** per la sua partecipazione decisiva nei piani politici, economici e militari che hanno generato il mantenimento e l'impunità della situazione che è stata denunciata.

5.3.5 Infine, il Tribunale vuole ricordare che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono considerati i più gravi dalla comunità internazionale e per questo sono di competenza della Corte Penale Internazionale. Si tratta di crimini imprescrittibili per i quali non esiste nessuna esenzione di responsabilità che possa derivare da incarichi istituzionali. Infine, è anche opportuno segnalare che non solo le vittime possono denunciare alla

Procura della Corte i fatti menzionati, sempre che si tratti di fatti accaduti posteriormente al 1 luglio 2002, ma che, in accordo con lo Statuto di Roma, qualsiasi Stato che ne fa parte può denunciare al Procuratore una situazione in cui potrebbero essersi verificati detti crimini, come nel caso della Colombia.

6. CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il Tribunale e tutti coloro che hanno promosso questa lunga sessione colombiana sono coscienti che una condanna morale non può direttamente produrre conseguenze sulle tragiche condizioni che le udienze hanno illustrato e documentato. Tuttavia è importante far conoscere alla comunità internazionale e all'opinione pubblica mondiale quello che succede realmente in Colombia, visto che le informazioni riportate dai mezzi di comunicazione internazionali sono spesso manipolate e distorte da interessi economici e politici.

Il Tribunale lancia un appello a tutti coloro che sperano e lottano per un mondo più giusto e credono nei principi stabiliti delle Costituzioni, Carte e Convenzioni sui diritti umani, affinché facciano proprie la sofferenza e la volontà di cambiare la insopportabile situazione che vivono i popoli.

Le sentenze di condanna, indispensabili per far conoscere al mondo le responsabilità di omicidi, massacri, sfollamenti forzati, sequestri, violazioni massive e sistematiche di diritti umani, servono per ricordare che la comunità internazionale ha le possibilità, se vuole, di porre fine all'impunità dei potenti.

Nei giorni in cui l'udienza giungeva a conclusione, ci è pervenuta la notizia dell'arresto di Radovan Karadzic, ex presidente della cosiddetta Repubblica dei Serbi di Bosnia, fatto che dimostra che è possibile condurre indagini per sanzionare le violazioni dei crimini più gravi contro l'umanità.

Le imprese transnazionali operano a livello globale e per questo è necessaria una risposta internazionale. La risposta dello Stato è indispensabile, ma non sufficiente. Il Diritto Internazionale dei Diritti Umani, le Costituzioni e le norme di tutela per le persone e le comunità devono prevalere per evitare che le imprese transnazionali violino i diritti dell'umanità intera.

Per questo motivo, è necessario garantire con assoluta priorità la sovranità, la dignità dei popoli e i diritti delle persone rispetto agli interessi economici dei settori privati, impedendo la privatizzazione delle risorse fondamentali per la vita, come l'acqua, l'aria, le sementi, il patrimonio genetico, ed assicurando l'accesso universale ai servizi pubblici.

Per queste ragioni il TPP formula le seguenti raccomandazioni, che coincidono con il suo impegno ad agire affinché queste possano realizzarsi.

6.1 Alle istituzioni internazionali

Al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, affinché designi un Relatore Speciale che presenti all'Assemblea Generale un rapporto che contenga la

proposta di dare valore vincolante alle Norme sulle responsabilità delle imprese multinazionali e delle altre imprese commerciali riguardo ai diritti umani, proposte nel contesto dei lavori della Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite del 26 agosto 2003. Con questo fine, deve costituirsi un Tribunale Internazionale per l'istituzione di processi per crimini economici e ambientali davanti al quale le vittime, singolarmente o collettivamente, possano costituirsi legittimamente come parte lesa.

Agli organismi internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, Banca Interamericana dello Sviluppo) la urgente e ormai evidente necessità di modificare le loro politiche neoliberiste portate avanti negli ultimi decenni e di constatare la gravità dei danni che queste politiche hanno prodotto soprattutto nei Paesi a basso reddito, prendendo in considerazione la specificità di ogni Paese e il corrispondente diritto di ogni popolo a determinare il proprio modello economico e il proprio processo di sviluppo.

Agli stessi organismi internazionali affinché introducano, nelle loro politiche di finanziamento del settore privato, l'obbligo di realizzare valutazioni previe indipendentemente dai loro interessi. E che dichiarino una moratoria nel finanziamento delle imprese transnazionali con lo scopo di valutare i costi e i benefici dei loro progetti, prendendone in considerazione gli impatti economici, sociali e ambientali che comportano la perdita della biodiversità e il cambiamento climatico.

All'Unione Europea affinché condizioni, previo un controllo reale, effettivo ed efficace, i suoi aiuti economici ai governi dell'America Latina al pieno rispetto dei diritti umani e all'adempimento dell'obbligo di sanzionare le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

Alle Nazioni Unite, affinché costituisca una Commissione per la Verità, imparziale e indipendente, per stabilire la verità su quello che è successo in questi decenni rispetto alle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, senza rinunciare, ovviamente, al dovuto e pieno esercizio della giurisdizione penale.

6. 2. Al Governo colombiano

Il Tribunale raccomanda di:

Adempiere alla sentenza C-370 del 18 maggio 2006 della Corte Costituzionale del 2006 sulla legge 975 del 2005, detta *Justicia y Paz*, e modificare questa legge in accordo con gli standard internazionali sui diritti umani.

Denunciare l'accordo bilaterale tra Colombia e Stati Uniti del 17 settembre 2003 riguardo alla consegna alla Corte Penale Internazionale di persone statunitensi, in quanto viola il trattato di Roma del 1998 che ha istituito la Corte Penale Internazionale.

Ritirare la riserva riguardo ai crimini di guerra formulata dalla Colombia nel contesto dell'articolo 124 dello Statuto della Corte Penale Internazionale;

Applicare quanto affermato il 13 settembre 2007 nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.

Revocare le concessioni di sfruttamento delle risorse naturali nei territori indigeni realizzate senza previo consenso dei popoli originari che da sempre ci vivono.

Adempiere al dovere di investigare e sanzionare i responsabili di violazioni di diritti umani.

Realizzare strutture legali idonee per far sí che le vittime di violazioni di diritti umani in Colombia possano vedere realmente rispettati i loro diritti alla verità, alla giustizia e alla riparazione totale, quest'ultima completa delle sue componenti di soddisfazione, indennizzo e garanzia che tali violazioni non si ripetano.

Costituire un sistema giudiziario veramente indipendente, valido ed efficace, e sostenerlo con impegno affinché possa portare a termine i processi di chiarificazione dei fatti.

Favorire le negoziazioni umanitarie e di pace.

6.3 A tutti i governi:

Considerare vincolanti, nei rapporti economici internazionali e nelle decisioni di politica economica e di cooperazione internazionale, la priorità, la garanzia e il rispetto dei diritti umani, dello sviluppo umano, della democrazia e della protezione dell'ambiente.

Esigere dalle imprese multinazionali e dalle istituzioni finanziarie internazionali, commerciali e di capitale privato l'abbandono della loro doppia morale e il loro impegno a rendere effettiva, in modo obbligatorio e non discrezionale, e sotto il controllo dell'opinione pubblica, una politica che rispetti la priorità del Diritto Internazionale dei Diritti Umani.

Agli Stati d'origine delle imprese transnazionali e agli Stati dove queste imprese svolgono le loro attività, che vigilino affinché le multinazionali rispettino effettivamente le norme esistenti, e che dettino norme internazionalmente vincolanti affinché queste imprese applichino, in qualunque luogo, gli stessi standard di rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal Paese in cui operino.

Garantire che le imprese transnazionali che violano i diritti umani, i diritti lavorativi e sindacali e che compromettono l'ambiente naturale, rispondano dei loro atti e delle conseguenze di questi davanti alle istituzioni giudiziarie di ognuno dei Paesi in cui commettano tali violazioni e, eventualmente, anche davanti ad un Tribunale Internazionale.

Considerando che le ricchezze e le risorse naturali non appartengono ai governi ma ai popoli, che hanno il diritto di godere e di disporre di queste pienamente e liberamente (art. 25 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e art.8 della Dichiarazione Universale del Diritto dei Popoli del 1976), è necessario applicare misure ispirate al principio internazionalmente riconosciuto del consenso libero, previo e informato delle comunità locali e delle popolazioni originarie, così come al principio di precauzione quando si definiscono accordi e politiche di sviluppo e di investimenti di capitali che possano produrre effetti negativi sulla terra, lo spazio vitale e i diritti fondamentali; e garantire il diritto di opposizione a persone e comunità che considerino danneggiati i loro diritti individuali e collettivi a causa di iniziative o azioni delle imprese transnazionali.

Incrementare gli obblighi fiscali delle imprese transnazionali per evitare il loro arricchimento spropositato, da parte sia di governi nazionali sia di governi locali (iniziando dal settore minerario, dove si sono verificate riduzioni scandalose).

Limitare le aree di sfruttamento concesse alle imprese transnazionali, vietando l'accesso ai territori indigeni (se privi del consenso delle popolazioni locali), alle zone di approvvigionamento idrico, alle zone forestali protette, alle zone dichiarate patrimonio nazionale e a quelle che l' UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità.

Riconoscere il diritto di ricorrere direttamente alle istituzioni giudiziarie per richiedere il riconoscimento delle responsabilità e la riparazione di eventuali violazioni di diritti in cui incorrono le multinazionali.

6.4 Ai gruppi insorgenti

Rispettare in ogni circostanza il diritto internazionale umanitario, che protegge la popolazione civile.

Liberare, immediatamente e incondizionatamente, i civili sequestrati.

Favorire negoziazioni umanitarie e di pace.

6.5 Al Procuratore Generale della Corte Penale Internazionale

Che non rimandi oltre la sua decisione di aprire un'indagine sul caso Colombia, considerati i numerosi crimini, di competenza della Corte, di cui le udienze di questa sessione del Tribunale Permanente dei Popoli hanno dimostrato l'esistenza.

6.6 Alla comunità internazionale

Dinanzi all'operato delle imprese transnazionali, la società intera deve assumere una posizione etica e giuridica di rifiuto della fame, della mancanza di abitazioni, di educazione, di salute, di lavoro, di sicurezza alimentare e, in

generale, delle condizioni disumane di povertà che ostacolano il raggiungimento di standard di vita dignitosi per gli individui e i popoli. Questo rifiuto etico e giuridico non deve essere diverso da quello che la comunità internazionale ha assunto nei confronti della tortura o delle esecuzioni extragiudiziarie, delle sparizioni forzate e delle detenzioni arbitrarie. Il rifiuto e la condanna devono essere inoltre estese alle politiche delle organizzazioni internazionali e degli Stati che promuovono la competitività globale, la privatizzazione dei beni pubblici e la precarietà del lavoro, e che non si oppongono alle pratiche delle imprese multinazionali a discapito e al loro disinteresse nei confronti dei diritti dei loro popoli e del rispetto dei diritti umani. Allo stesso modo, si devono identificare e denunciare gli attori non statali, come le imprese multinazionali, per il modo in cui determinano e provocano queste violazioni, imponendo le loro politiche a governi a volte deboli, a volte complici del loro agire.

Il Tribunale, inoltre, esorta la comunità internazionale a prendere le distanze dalle informazioni diffuse sulla Colombia e raccomanda di considerare che proprio per le tante atrocità presentate davanti a questa e alle precedenti udienze, né le fonti ufficiali di informazione né quelle non ufficiali, che a lungo hanno mantenuto il silenzio su tutti questi crimini, possono essere ritenute attendibili.

6.7 Agli azionisti delle imprese multinazionali

Il Tribunale esorta inoltre gli azionisti delle imprese transnazionali nei loro Paesi d'origine ad informarsi sul comportamento delle loro filiali all'estero e a vincolarlo ad un controllo etico.

6.8 Alla giustizia colombiana

Il Tribunale considera necessario ed opportuno lanciare un appello agli avvocati, ai procuratori e ai magistrati della Colombia affinché assumano un ruolo decisivo nella ricerca di una giustizia autentica, che è un presupposto per il raggiungimento della pace.

Il Tribunale sa bene che esistono in Colombia magistrati e giudici seriamente impegnati nel compito di esercitare la giustizia ed è a conoscenza del ruolo indipendente svolto dalla Corte Suprema di Giustizia in questi ultimi anni. Ma deve constatare, sulla base di diverse sentenze della Corte Interamericana dei diritti umani e da quello che è risultato manifesto nelle udienze svoltesi in questi due anni, che il sistema giudiziario non è ancora capace di offrire adeguate risposte alla domanda e all'invocazione di giustizia dei cittadini. È ormai accertato che l'impunità in Colombia è un fenomeno diffuso e generalizzato.

Il Tribunale ritiene importante segnalare che, oltre al rafforzamento di un potere giudiziario veramente indipendente da tutti gli altri poteri, si sta estendendo a livello universale una nuova concezione del diritto e della giurisdizione. Nella moderna giurisprudenza non c'è posto per la superata concezione formale del diritto, che ha permesso il degrado delle istituzioni giuridiche e l'utilizzo perverso della legge come scudo per procedimenti contrari ai diritti fondamentali degli individui, per l'uso della violenza a beneficio di privilegi

immorali e come garanzia di legittimità per i soprusi nei confronti della vita, dei diritti fondamentali e della dignità degli esseri umani più fragili e privi di protezione. Il costituzionalismo ha orientato il diritto verso la tutela dell'essere umano, che ne è centro e finalità, e ha stabilito una stretta connessione tra umanesimo e diritto. I giuristi hanno la responsabilità di promuovere nella pratica questa complementarità.

Il sistema di diritto internazionale creato dalle Nazioni Unite si fonda sui diritti umani, sulla centralità di ogni persona, sull'uguale dignità di tutti i popoli (senza nessuna distinzione tra vincitori e vinti) e sulla loro preminenza sugli interessi economici. È ugualmente vero che nel sistema internazionale, oltre alle strutture delle Nazioni Unite, la cui azione si ispira al rispetto dei diritti umani e all'uguale dignità di ogni individuo e popolo, coesistono istituzioni come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio che, con le loro politiche neoliberaliste, stabiliscono alleanze con le imprese multinazionali in contraddizione con la possibilità di rendere effettivi quei diritti.

Tuttavia le costituzioni di molti Paesi, tra cui la Costituzione della Colombia, prescrivono che il diritto internazionale (a cominciare dai diritti umani) si converta in diritto interno, vincolante non solo per il governo e il parlamento, ma anche per i giudici.

Soprattutto i giuristi e i giudici devono essere pienamente coscienti del fatto che la Costituzione assegna alla giurisdizione un ruolo che non è secondario rispetto al potere legislativo ed esecutivo, un ruolo di garanzia e di effettività dei diritti fondamentali di ogni persona, la cui piena tutela costituisce la finalità di tutto l'ordinamento democratico e del nuovo diritto internazionale.

La democrazia non consiste solamente in un procedimento elettorale, ma anche in un dibattito pubblico, aperto a tutti i componenti della società e ad ogni cittadino, a garanzia del libero esercizio di tutti i suoi diritti. Solo in questo modo si può edificare e costituire la "ragione pubblica" per la salvaguardia dell'interesse comune. Oggi il dibattito pubblico e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica sono stati sostituiti dalla televisione, a sua volta gestita da élite economiche. Il ruolo del cittadino è stato ridotto a consumatore e spettatore della politica fatta da politici trasformati in personaggi del mondo televisivo. Spesso il potere economico, il potere politico e il potere mediatico si concentrano nelle stesse mani: un potere enorme e smisurato che violenta e perverte il processo democratico e impedisce un reale dibattito pubblico e il formarsi di un'opinione libera del cittadino. Il monopolio o l'oligopolio dell'informazione e della formazione dell'opinione pubblica, che accomuna molti Paesi, ci induce a dubitare che quella attuale possa definirsi una vera democrazia.

Inoltre, democrazia costituzionale non vuol dire solo svolgimento e discussione pubblica collettiva, ma anche rispetto per i vincoli e i limiti che le costituzioni impongono alla sovranità, cioè alla politica e alla maggioranza che legittima (in maniera più o meno autentica) chi detiene il potere decisionale. Le tragiche esperienze della violazione dei diritti umani più elementari commesse da Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Pinochet e durante le altre dittature in America

Latina, hanno ricevuto per un certo periodo il consenso della maggioranza dei cittadini e hanno generato uno Stato costituzionale di diritto che ha reso possibile la tirannia della maggioranza.

In questa situazione, la giurisdizione può e deve svolgere sempre meglio la funzione di porre dei limiti alla maggioranza, per tutelare e garantire i diritti delle persone, soprattutto dei soggetti più vulnerabili, ossia di coloro che non sono rappresentati nelle aule del parlamento.

Per correggere le tendenze perverse delle oligarchie politiche, complici o quantomeno condizionate dal potere economico e finanziario delle imprese multinazionali, e per tutelare i più deboli dalle pressioni della maggioranza intollerante, è necessario, da un lato, valorizzare la dimensione sovranazionale e internazionale degli ordinamenti e, dall'altro, porre l'accento sui diritti delle persone, dei movimenti, delle associazioni che, *dal basso*, costituiscono un'alternativa al modello mercantile della globalizzazione selvaggia.

Anteporre la persona, titolare dei diritti umani, agli interessi economici, significa il dibattito sulle garanzie giuridiche, cosa che implica il ruolo attivo e promotore della giurisdizione e, necessariamente, la ricerca e il potenziamento degli strumenti più adeguati per garantire l'indipendenza, la professionalità e l'efficienza della magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura, stabilità degli incarichi giudiziari, formazione professionale, valutazione della professionalità, risorse economiche e tecnologia, dialogo tra corti di differenti Paesi, collaborazione tra le associazioni giudiziarie, ecc...). E questo non per eccesso di fiducia nella magistratura o nell'ordinamento giuridico sopranazionale e internazionale, ma per l'attuale incapacità strutturale degli Stati nazionali e delle oligarchie politiche di riuscire a governare il super potere economico delle imprese multinazionali e per fornire ai soggetti e ai movimenti che non hanno rappresentanza politica negli ordinamenti nazionali strumenti politici di difesa e liberazione più efficaci.

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

7.1 Legislazione colombiana

- Constitución Política de Colombia 1991
- Ley 685 de 2005, del Código Minero
- Ley 1021, de 2006, Ley Forestal
- La Ley 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural
- Paramilitarismo: Ley 418 de 1997, Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003, Decreto 2767 de 2004 y ley 1106 de 2006.
- Ley 975 de Justicia y Paz, de 25 de julio de 2005

7.2 Trattati e altri testi internazionali

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217 (III), 1948.
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Resolución 260 A (III) AGNU, 9 de diciembre de 1948.
- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n° 87), 9 de julio de 1948, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N° 98), Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
- Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949.
- Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Resolución 2106 A (XX) AGNU, 21 de diciembre de 1965.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200 A (XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
- Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, Resolución 3074 (XXVIII) AGNU, 3 de diciembre de 1973.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977.
- Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales 1977.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 39/46 AGNU, 10 de diciembre de 1984.
- Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Cartagena de Indias, Colombia, 12 de septiembre de 1985.
- Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Resolución 40/34 AGNU, 29 de noviembre de 1985.
- Declaración sobre el derecho al desarrollo, Resolución 41/128 AGNU, 4 de diciembre de 1986.
- Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, C169, 1989.
- Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento de los mercenarios, Resolución 44/34 AGNU, 4 de diciembre de 1989.
- Protocolo de Minnesota, de 1991, Manual de la ONU para la Prevención e Investigación efectivas de Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales, Arbitrarias o Legales.

- Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992.
- Convención de las Naciones Unidas sobre biodiversidad 1992.
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Resolución 47/135 AGNU, 18 de diciembre de 1992.
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, OEA, Belem do Para, Brasil, 9 de junio de 1994.
- Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.
- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, Conferencia General de la UNESCO, 11 de noviembre de 1997.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998.
- Protocolo de Estambul, de 1999, Manual de la ONU para la investigación y documentación efectivas de la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
- Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, de 29 de enero de 2000.
- Declaración del Milenio, Resolución 55/2 AGNU, 8 de septiembre de 2000.
- Declaraciones realizadas por el Estado Colombiano en el momento del depósito de instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma, 2 de agosto de 2002.
- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 57/199 AGNU, 18 de diciembre de 2002.
- “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 13 de agosto de 2003.
- “Acuerdo respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional”, entre los Estados Unidos de América y Colombia, de 17 de septiembre de 2003.
- Resolución 60/1 AGNU, Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 16 de septiembre de 2005.
- Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución 60/147 AGNU, 16 de diciembre de 2005.
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución 61/295 AGNU, de 13 de septiembre de 2007.

7.3. Giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti umani

- Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995
- Caso 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004
- Resolución de 5 de julio de 2004, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Caso Pueblo Indígena Kankuamo
- Caso Las Palmeras, Sentencia de 6 de diciembre de 2001
- Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Sentencia de 12 de septiembre de 2005
- Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 septiembre de 2005
- Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006
- Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006
- Resolución de 30 de enero de 2007, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo
- Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de Mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas)
- Caso Escué Zapata vs. Colombia, Sentencia de 4 de julio de 2007, (Fondo, Reparaciones y Costas).

7.4 Rapporti di organismi internazionali pertinenti

- ONU, Comisión de Derechos Humanos, “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 45° período de sesiones, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8.
- Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 29 de noviembre de 1996.
- ONU; Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Mr. Param Cumaraswamy, ADDENDUM, Report on the mission of the Special Rapporteur to Colombia, Doc. E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 March 1998.
- OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. 1999.
- ONU, Comisión de Derechos Humanos, “El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Informe Final del Relator Especial, Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la resolución 1999/93 de la Comisión, Doc. E/CN.4/2000/62.

- ONU, Specific Groups and Individuals: Mass Exoduses and Displaced Persons, Report of the Representative of the Secretary-General on internally displaced persons submitted in accordance with Commission resolution 1999/47, Addendum, Profiles in displacement: follow-up mission to Colombia; Doc. E/CN.4/2000/83/Add.1, 11 January 2000.
- ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, Examen de los informes presentados por los Estados Partes, de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Colombia; Doc. E/C.12/1/Add.74, 6 de diciembre de 2001.
- ONU, Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective, Violence against Women, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49, Addendum, Mission to Colombia (1-7 November 2001); Doc. E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 March 2002.
- ONU, Promotion and Protection of Human Rights, Human Rights Defenders, Report submitted by Ms. Hina Jilani, Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, pursuant to Commission on Human Rights resolution 2000/61, Addendum, Mission to Colombia (23-31 October 2001); Doc. E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 March 2002.
- ONU, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seminario Internacional Verdad y Justicia en procesos de paz o transición a la democracia. Memorias, Bogotá, junio de 2003.
- ONU, Comité contra la Tortura, Examen de los Informes presentados por los Estados Parte en virtud del Artículo 19 de la Convención, Conclusiones y Recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia; Doc. CAT/C/CR/31/1, 4 de febrero de 2004.
- ONU, Economic, Social And Cultural Rights, The right to education, Report submitted by Katarina Tomaševski, Special Rapporteur, Addendum, Mission to Colombia, (1-10 October 2003); Doc. E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 February 2004.
- ONU, Racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of discrimination, Report by Mr. Doudou Diène, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Addendum, Mission to Colombia, Doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, 24 February 2004.
- ONU, Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Colombia; Doc. CCPR/CO/80/COL, 26 de mayo de 2004.
- ONU, Cuestiones Indígenas, Derechos humanos y cuestiones indígenas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Adición, Misión a Colombia; Doc. E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 November 2004.

- OEA, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 13 diciembre 2004.
- ONU, Derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, Adición, Misión a Colombia,; Doc. E/CN.4/2005/64/Add.3, 26 November 2004.
- ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005.
- ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; Doc. E/CN.4/2005/91.
- ONU, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones sumarias, Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias, Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Adición, Misión a Colombia; Doc. E/CN.4/2006/56/Add.1, 17 de enero de 2006.
- ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006.
- ONU, Informe provisional del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Doc. E/CN.4/2006/97 22 de febrero de 2006.
- OEA, Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 1 marzo 2006.
- ONU, Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención, Observaciones finales, Colombia; Doc. CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006.
- ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición, Misión a Colombia; Doc. A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007.
- ONU, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Colombia; Doc. CEDAW/C/COL/CO/6, 2 de febrero de 2007.
- ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, Las

- empresas y los derechos humanos: catálogo de las normas internacionales sobre responsabilidad y rendición de cuentas por actos cometidos por empresas; Doc. A/HRC/4/35, 19 de febrero de 2007.
- ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Responsabilidades de los Estados en materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales con arreglo a los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: panorama general de los comentarios de los órganos creados en virtud de tratados; Doc. A/HRC/4/35/Add.1, 13 de febrero de 2007.
 - ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición 2, Responsabilidad empresarial con arreglo al derecho internacional y cuestiones relacionadas con la regulación extraterritorial: resumen de los seminarios jurídicos, Doc. A/HRC/4/35/Add.2, 15 de febrero de 2007.
 - ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Políticas de derechos humanos y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos y a las empresas de la lista Fortune Global 500; Doc. A/HRC/4/35/Add.3, 28 de febrero de 2007.
 - ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Adición, Reconocimiento de los derechos humanos por las empresas: tendencias mundiales, variaciones regionales y sectoriales, Doc. A/HRC/4/35/Add.4, 8 de febrero de 2007.
 - ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. A/HRC/4/48, 5 de marzo de 2007.
 - ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008.
 - ONU, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Nota preliminar sobre la misión al Ecuador y Colombia, Adición; Doc. A/HRC/7/11/Add.3, 4 de marzo de 2008.

7.5 Rapporti di organizzazioni non governative

- Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, (24 de julio, 1998).
- Internacional Council on Human Rights, “Más allá de los discrecional. Los derechos humanos y la emergencia de obligaciones legales internacionales para las empresas”; Versoix, Suiza, 2002.
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) - Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras Francia (ASF), “Colombia: ¿Administración de la justicia... o de la impunidad?”, Informe Misión internacional de investigación, Mayo 2003.
- Amnistía Internacional, “Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?”, Septiembre de 2005.
- Escola de Cultura de Pau, “Empreses espanyoles a Colòmbia, Costos i Oportunitats en la construcció de la Pau i els Drets Humans”, Generalitat de Catalunya – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, desembre 2005.
- Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Viena, 10-12 de mayo de 2006, Conclusiones.
- Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, “Colombia Las Tinieblas de la Impunidad: Muerte y Persecución a Los Defensores de Derechos Humanos.” Misión internacional de investigación Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia (13 al 18 de noviembre de 2006).
- Coalición Colombia y Comisión Colombiana de Juristas, “Violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de las niñas y los niños en Colombia 2005-2006”, Bogotá, Colombia, febrero de 2007.
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “Colombia, La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional”, Octubre 2007.
- Universidad de los Andes – International Alert, “Explorando el dividendo de la paz: Percepción de los impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional”, marzo 2008.
- Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Lima, 13-16 de mayo de 2008, Dictamen.

8. CONCLUSIONE

A conclusione di questa sessione portata avanti per più di due anni, il Tribunale sente la necessità di estendere il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e, in special modo, a tutte le persone che, con serietà e coraggio, hanno presentato le accuse fondate su solide prove e le testimonianze dei fatti, che hanno permesso la ricostruzione di quanto è successo, rinnovando con le loro parole la sofferenza e il dolore prodotto da avvenimenti così drammatici.

Il Tribunale esprime la sua profonda preoccupazione per la mancanza di protezione di coloro che lottano per il rispetto dei diritti umani in Colombia e in particolare di coloro i quali hanno richiesto questa sessione o vi hanno partecipato come testimoni o relatori. Le continue minacce ai diritti e alla stessa vita di queste persone, che con coraggio e serietà hanno assolto il compito di cittadini impegnati per la dignità, le libertà e i diritti di tutti i colombiani, alimentano i suoi timori.

In ricordo del brutale assassinio di Eduardo Umaña Mendoza, che aveva sostenuto con rigorosa professionalità giuridica e integrità morale le accuse presentate dinanzi al TPP nella storica sessione sull'impunità in America Latina (Bogotà, 22-25 aprile 199), il Tribunale ritiene che tutto ciò che d'ora in avanti succedesse ai relatori e i testimoni di questa udienza sarà considerato come responsabilità diretta del governo colombiano.

Il Tribunale ritiene opportuno ringraziare anche coloro che hanno partecipato alle udienze con la loro presenza continua, attenta e partecipe, come rappresentanti dei collettivi e dei popoli, come parte di un ampio movimento impegnato nella lotta contro ogni tentativo di dimenticanza, a sostegno della domanda di giustizia e verità delle vittime, per promuovere una attenzione reale ai diritti umani nelle istituzioni.

I giudici hanno appreso da questa presenza e dalla straordinaria partecipazione cittadina che ha accompagnato lo sviluppo del lavoro del Tribunale che dinanzi alla nascita di un movimento di lotta contro l'ingiustizia e le disuguaglianze, i diversi trattati internazionali e le costituzioni nazionali smettono di essere un mero catalogo di diritti di carta per trasformarsi in strumenti di rivendicazione personale e sociale e di cambiamento democratico.

In ultima istanza, il Tribunale esprime tutta la sua stupita ammirazione per il fatto che, nonostante la situazione tragica che da molti decenni insanguina il Paese, la resistenza all'ingiustizia continua ad essere viva, così come la volontà di continuare a lavorare ininterrottamente per superare la cultura del conflitto e della guerra, promuovere la trasformazione della società e dare vita ad un effettivo Stato costituzionale sociale di diritto.

Il Tribunale si impegna a dare voce e trasmettere al mondo il sentimento di ottimismo evocato dalla volontà di cambiamento dimostrata che può solo condurre ad una immensa speranza.

Il Tribunale, vista l'importanza e trascendenza delle richieste di giustizia che hanno accompagnato le presentazioni, con l'intenzione di incoraggiare tribunali e operatori di giustizia a sviluppare i contenuti del diritto e ad affermare un diritto alla giustizia efficace, risolve di inviare i fatti documentati, il verdetto e le raccomandazioni non solo alle istituzioni governative e alle imprese multinazionali che sono state considerate in questa sentenza, ma anche, secondo le loro competenze, facoltà e compiti, alle seguenti rappresentanze e istituzioni:

- Procuratore Generale della Corte Penale Internazionale.
- Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
- Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relatori speciali competenti in questa materia, Relatore Speciale per l'indipendenza della magistratura e dei giudici, Rappresentante Speciale del Segretario Generale della Nazioni Unite sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altri tipi di impresa.
- Corte europea per i Diritti Umani.
- Commissione e Corte interamericana dei diritti umani.
- Presidente della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Giustizia, Procuratore generale, e Difensore civico in Colombia.
- Governi degli Stati membri, Commissione e Parlamento dell'Unione Europea.